



COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS  
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
**2019-2024**

**FICHA DE PRESENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS  
DE PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS**

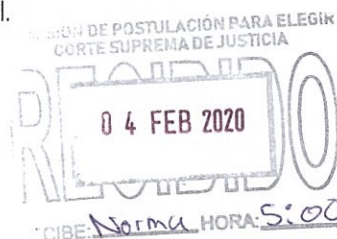
Fecha: 04 de febrero de 2020 Número de Expediente: 44  
Nombres y Apellidos del Postulante: Henry Alejandro Elías Wilson  
Denunciante: José Pablo Juárez Herrera DPI: 3017392420101  
Institución: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: \_\_\_\_\_  
Dirección Física: 13 Calle 2-14 zona 1 Ciudad de Guatemala  
Dirección Electrónica: Contacto@AlianzaReformas.org  
Teléfono (s): 2463 1313

FIRMA

**NOTA IMPORTANTE:**

Adjuntar copia legible del DPI con fotografía clara.

Fotocopia legalizada de nombramiento de Representante Legal.

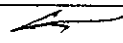




Guatemala, 4 de febrero de 2020

Señores/as miembros/as de la Comisión de Postulación para selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, período 2019-2024, con base en lo establecido en la Constitución Política de la República, la ley de Comisiones de Postulación decreto número 19-2009, la Ley de la Carrera Judicial decreto número 32-2016 y en atención a la publicación de fecha 31 de enero de 2020 en diarios de mayor circulación, en la cual invita a cualquier persona jurídica o individual a presentar impedimentos a los aspirantes que continúan en el proceso de selección, se hace saber a la Comisión de la existencia del siguiente:

**IMPEDIMENTO:**

<b>Datos del o la aspirante contra quien se presenta el impedimento:</b>	
<b>Nombre:</b>	Henry Alejandro Elías Wilson 
<b>Número de expediente</b>	44
<b>Motivo:</b>	
Falta de imparcialidad con la justicia e independencia en el ejercicio profesional, esto en relación a las incompatibilidades, incapacidades e impedimentos contempladas en el apartado referente a los aspectos éticos (inciso B del perfil de los participantes) con los que deben cumplir los aspirantes y que fue aprobado por esta honorable Comisión de Postulación:	
<b>Información sobre el o la postulante:</b>	
Actualmente el licenciado Henry Alejandro Elías Wilson forma parte de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Guatemala.	
<b>Hechos en los que se fundamenta la objeción:</b>	
El día 23 de febrero de 2017, la Sala de la Corte de Apelaciones que integra el Licenciado Elías Wilson constituida como Tribunal Constitucional de Amparo admite para trámite acción de amparo planteado por Silvia Patricia Valdés Quezada y otorga Amparo Provisional. La entonces Magistrada Valdés Quezada buscaba dejar sin efecto el diligenciamiento de audiencia agendada por la Junta de Disciplina Judicial para el 24 de febrero de 2017. La audiencia en cuestión para la cual fue citada la entonces Magistrada Valdés Quezada se da por una denuncia de difamación realizada por la activista de Derechos Humanos Helen Mack Chang, puesto que la entonces Magistrada difundió mensajes difamatorios vertidos por el Sr. Ricardo Méndez Ruíz por razón de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente la Fundación Myrna Mack apeló lo resuelto por el Tribunal integrado por el Licenciado Elías Wilson y derivado de dicha apelación, Corte de Constitucionalidad, el 26 de junio de 2017 resuelve lo siguiente: <i>"apreciados los hechos relatados por la postulante, con base en el análisis efectuado a la copia de la pieza de amparo de primer grado; la resolución que se conoce en alzada y el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32 – 2016 del Congreso de la República, a juicio de esta Corte, en el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina."</i>	



*requerida, ni se dan los supuestos regulados en el artículo 28 ibídem, por lo que debe revocarse el numeral X de la resolución apelada y denegar el amparo provisional solicitado."*

Posteriormente, el 19 de abril de 2018 Corte de Constitucionalidad resuelve como tribunal de segunda instancia lo siguiente: *"No causa afectación a los derechos constitucionales reconocidos, la decisión de la junta de disciplina judicial que, al resolver un recurso de reposición, confirma la decisión de admitir a trámite una denuncia presentada contra un funcionario judicial, porque será en el proceso respectivo, que se determinará si el hecho imputado es constitutivo de falta o no. (...) Por lo considerado se estima que el amparo planteado es notoriamente improcedente, por lo que debe denegarse, y habiéndose resuelto en distinto sentido por el a quo debe revocarse el fallo que se conoce en alzada, emitiendo la sentencia que en Derecho corresponde (...)"*

Asimismo, el Licenciado Elías Wilson actuando como miembro de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala también favoreció con amparo provisional al Sr. Gustavo Alejos Cámbara por el caso conocido popularmente como "Negociantes de la salud". También dicha sala otorgó amparo provisional a la magistrada separada Blanca Aída Stalling Dávila esto por el diligenciamiento del proceso donde la magistrada separada es sindicada de tráfico de influencias, derivado de la participación de su hijo en el caso "Negociantes de la salud". En este sentido, puede observarse un sesgo en la forma de resolver de parte del Licenciado Elías Wilson respecto estos casos.

De igual forma es necesario señalar que el día 22 de enero de 2016, el Sr. Enrique Nils Pira Ortega remitió denuncia nueva a la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público contra la secretaria de la sala, notificadores Y CONTRA QUIENES RESULTAREN RESPONSABLES. Dicha denuncia responde a la comisión de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias puesto que el día 15 de diciembre de 2015, notificaron auto que decreta amparo provisional sin las firmas de los magistrados de la Sala. En ese mismo orden de ideas, el veintiséis de enero de 2016 la auxiliar fiscal I de la Fiscalía de Sección Contra la Corrupción recibe denuncia interpuesta por Luis Roberto Castellanos por el mismo caso e indicando que la denuncia es CONTRA TODAS LAS PERSONAS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Por razón de dichas denuncias, el caso es conocido por la entonces Fiscal de Sección de Delitos Administrativos, HEIDY TAMARA DE LEÓN MUÑOZ, persona con la que el Lic. Elías Wilson procreó una hija, extremo que se puede acreditar con los medios de prueba presentados. Asimismo, se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios correspondientes a quien corresponda dentro del Ministerio Público para que faciliten las actuaciones del expediente MP001-2017-33223, en el cual se determina que la Licda. De León Muñoz indicó la forma en la que debería abordarse la denuncia planteada contra la Sala en la que se desempeña como magistrado el Licenciado Elías Wilson.

Esto es de vital importancia pues presume colusión en la investigación, esto en aras de favorecer al Licenciado Elías Wilson respecto la denuncia realizada contra la Sala por la notificación de actuaciones inexistentes dentro de los procesos que tramitan.



3

**Conclusiones:**

Tal como se ha expuesto en los párrafos previos, la judicatura donde se desempeña el Licenciado Elías Wilson ha sido señalada mediáticamente de favorecer con amparos provisionales a personajes de la vida política del país y que han sido sujetos a investigación, como en los casos mencionados en este escrito. Asimismo, las denuncias realizadas por peticionarios respecto la forma de actuar de la sala en cuestión genera suspicacia pues la investigación realizada fue dirigida por la madre de la hija del Licenciado Elías Wilson, situación que a todas luces no responde a los criterios de objetividad e imparcialidad que debe tener un administrador de Justicia.

**Solicitud.**

Solicitamos a esta honorable Comisión de Postulación que pondere en su justa dimensión los señalamientos realizados contra el Licenciado Elías Wilson, asimismo que solicite las actuaciones de la investigación realizada por la Fiscalía de Delitos Administrativos cuando la madre de la hija del Licenciado Elías Wilson se desempeñaba como fiscal. Esta investigación debe ser analizada con detenimiento pues presenta indicios de colusión entre la Licenciada De León Muñoz y el Licenciado Elías Wilson, en aras de solventar el problema para sí. De tal suerte, también indicamos a esta honorable comisión que al momento de elaborar el listado de candidatos elegibles que se remitirá al Congreso de la República de Guatemala, que no tome en cuenta al Licenciado Elías Wilson por no contar con el perfil de idoneidad, objetividad e imparcialidad necesario para desempeñar tal investidura.

**Medios de prueba que se adjuntan para respaldar el impedimento:**

- Copia simple de resolución de Sala de Femicidio donde otorga amparo provisional a Silvia Patricia Valdés Quezada;
- Copia simple de resolución de Corte de Constitucionalidad donde revoca el amparo provisional otorgado por la Sala de Femicidio en favor de Silvia Patricia Valdés Quezada;
- Copia simple de resolución de Corte de Constitucionalidad donde revoca en definitiva el amparo provisional otorgado por la Sala de Femicidio en favor de Silvia Patricia Valdés Quezada;
- Copia simple de nota de prensa donde indican que Sala de femicidio favoreció con amparo a Gustavo Alejos por caso Negociantes de la Salud;
- Copia simple de nota de prensa donde señalan que la Sala de apelaciones de femicidio favoreció con amparo provisional a la magistrada separada Blanca Aída Stalling Dávila;
- Se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios necesarios al Ministerio Público para que facilite las declaraciones testimoniales vertidas en calidad de testigo de la Señora Alejandra Paola Flores López dentro del expediente MP001-2017-3323;
- Se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios necesarios para que Ministerio Público facilite la declaración testimonial en calidad de testigo del Sr. Ever Alejandro Pérez Arriaza que constan dentro del expediente MP001-2017-33223;
- Se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios necesarios para que el Ministerio Público facilite la denuncia de fecha 16 de marzo de 2016 y que se identifica con el número MP001-2016-25292 planteada por la ASOCACIONES NACIONAL DE AVICULTORES por medio de su representante legal CARLOS GUSTAVO PALACIOS MORALES contra cualquier persona que resultare responsable por los malos manejos y notificación de actuaciones inexistentes dentro de la Sala de Apelaciones de Femicidio donde labora el Licenciado Elías Wilson.







OFICIO No. _____
REFERENCIA No. _____

**AMPARO 09-2017**  
**No. Único 01184-2017-00007**  
Junta de Disciplina Judicial  
Ref.: 019-2017, Of. III


SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA SEXUAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE AMPARO. GUATEMALA, VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -----

I. Por recibidos el memorial y documentos que anteceden, con los mismos iniciase la pieza respectiva; II. Se toma nota que la solicitante SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA, actúa en calidad de Magistrada Vocal Primera de la Corte Suprema de Justicia, conforme al documento que acredita dicha personería; III. Se toma nota que la solicitante actúa bajo la dirección y procuración de la abogada Amarilis Ondina Navas Portilla, así como del lugar señalado para recibir notificaciones; IV. Se toma nota de la dirección indicada para notificar a la autoridad denunciada; V. Se toma nota del tercero con interés propuesto y del lugar señalado para notificarle; VI. Se admite para su trámite la presente Acción Constitucional de Amparo promovida en contra de la JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL; VII. Que dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, la autoridad denunciada remita a este Tribunal de Amparo lo siguiente: A) Informe Circunstanciado relacionado al antecedente del presente Amparo, debiendo cumplir con lo regulado en el primer párrafo del artículo 25 del Acuerdo Número 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad; B) Copia certificada de las resoluciones de fechas siete y quince, ambos de febrero del año dos mil diecisiete y del escrito mediante el cual la solicitante plantea Recurso de Reposición en contra de la resolución de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete; C) Listado de todas las partes dentro del proceso, indicando nombres y direcciones para ser notificados, caso contrario, deberá oficiar si fuera necesario a donde corresponda a efecto de que se remita lo solicitado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá de conformidad con lo



5

11



**AMPARO 09-2017**  
**No. Único 01184-2017-00007**  
Junta de Disciplina Judicial  
Ref.: 019-2017, Of. III

regulado por el artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; VIII. Que por ser parte en el presente Amparo, se previene a la autoridad denunciada para que en el plazo anterior, cumpla con lo preceptuado en el artículo 79 del Código Procesal Civil, párrafo segundo, ya que de lo contrario se le seguirá notificando por los estrados de este Tribunal; IX. Se tienen por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo del memorial que se resuelve; X. De conformidad con lo establecido en la literal b) del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, este Tribunal considera procedente **DECRETAR EL AMPARO PROVISIONAL** solicitado, en virtud que según la documentación adjunta al memorial de interposición del presente Amparo, con fecha siete de febrero del año en curso, la Junta de Disciplina Judicial, señaló audiencia para el veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, a las once horas con treinta minutos, en la cual convocan a la solicitante y a las otras partes a comparecer ante esa dependencia, audiencia que al desarrollarse dejaría sin materia el presente Amparo, por lo que en consecuencia, se deja en suspenso la resolución de fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete -acto reclamado-; XI. Previo a confirmar o revocar el Amparo Provisional decretado, que la autoridad denunciada remita a este Tribunal el Informe solicitado; XII. En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad procesal; XIII. Notifíquese. -----

ARTÍCULOS: 203, 204 y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 33 y 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 108, 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 4º del Auto Acordado Número 1-2013; 7, 8, 9, 10 y 14 del Acuerdo Número 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad. -----



6  
12

EXPEDIENTES ACUMULADOS 935-2017 Y 1005-2017

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintiséis de junio de dos mil diecisiete.

En apelación y con copia de la pieza de amparo de primer grado, se examina la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, constituida en Tribunal de Amparo, en cuyo numeral X otorgó la protección interina solicitada, en la acción constitucional de amparo promovida por Silvia Patricia Valdés Quezada contra la Junta de Disciplina Judicial.

ANTECEDENTES

A) Hechos y argumentos que motivaron la promoción del amparo: de lo expuesto por la postulante en su escrito inicial y del análisis de las actuaciones, se resume: a. ante la Supervisión General de Tribunales del Organismo Judicial, la Fundación Myrna Mack, por medio de su Representante Legal, Helen Beatriz Mack Chang, presentó denuncia en su contra de la postulante, en la calidad que ejerció como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, por estimar vulneración a sus derechos al difundir un mensaje expresado por Ricardo Méndez Ruiz, relativo a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; esto según la denunciante fue realizado por medio de la aplicación "whatsapp"; b. dicha denuncia fue remitida a la Junta de Disciplina Judicial para su conocimiento, sin embargo, las actuaciones fueron devueltas a la Supervisión General de Tribunales para que procediera a la investigación de los hechos denunciados; c. dentro de las diligencias realizadas, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la postulante presentó

  
CIPJ-JEDV

  
CIPJ-DO

  
BM-CPIP

  
GPPE-CPIP

  
CIPJ-MGAM

  
REGRAL-CPIP



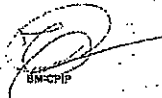


7  
B

documentación que estimó pertinente, con el propósito de demostrar la improcedencia de la denuncia referida; d. al finalizar la investigación, la Supervisión referida concluyó que no se encontraron elementos suficientes para establecer la conducta denunciada, por lo que recomendó no admitirla a trámite; e. al recibir las actuaciones, la Junta de Disciplina Judicial en resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, admitió para su trámite la denuncia relacionada; f. contra esa resolución, la postulante interpuso recurso de reposición, el que se declaró sin lugar en pronunciamiento de quince de febrero de dos mil diecisiete —acto reclamado—, con fundamento en que debían agotarse las fases del proceso con el propósito de esclarecer el hecho denunciado. Estima vulnerados sus derechos de defensa y petición, así como el principio jurídico del debido proceso, porque, al emitir la decisión que por esta vía reclama, la autoridad cuestionada varió la forma del proceso debido a que declaró sin lugar la reposición que interpuso sin observar que no debió ser admitida; toda vez que según aduce, se basó en las formulaciones efectuadas por la denunciante, pese a que debió fundamentarse en lo considerado por la Supervisión General de Tribunales; agregó que la autoridad cuestionada no posee la facultad para efectuar la investigación de los hechos denunciados, razón por la que tampoco podía decidir sobre la procedencia de la denuncia relacionada; afirmó que la autoridad objetada no se pronunció respecto de los agravios que expresó y el acto que señaló como lesivo, no contiene la debida fundamentación que impone el artículo 11 Bis del Código Procesal Penal. Solicitó que se otorgue el amparo provisional y, como consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado. B) Informe circunstanciado: la Junta de Disciplina Judicial, por medio de su Presidente, Gabriel Estuardo García Luna, informó lo siguiente: i) mediante resolución de

  
CPJP-JFDV

  
CPJP-DO

  
SMC-CPJP

  
SFP-CPJP

  
CPJP-MGAM

  
SFC-CPJP







8  
14

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**  
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Expedientes acumulados  
935-2017 y 1005-2017  
Página 3 de 6

siete de febrero de dos mil diecisiete, admitió la denuncia presentada contra la postulante con base en la investigación y análisis de las actuaciones realizada por los supervisores auxiliares de Tribunales y señaló audiencia para el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; ii) la solicitante interpuso recurso de reposición contra la admisión de la denuncia, la cual fue declarada sin lugar, y iii) la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Junta de mérito la reprogramación de la audiencia referida, con fundamento en que, en esa fecha, la denunciada debía asistir a la jornada de la Organización Internacional del Trabajo en Guatemala, por lo que se reprogramó para el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. C) **Decisión asumida por el a quo respecto del amparo provisional:** dispuso otorgarlo en el sentido de dejar en suspenso la resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete, señalada como lesivo. D) **Apelaciones:** la Fundación Myrna Mack y el Ministerio Público, por medio de la Agente Fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, abogada Sara Edith Zamora Ordoñez, -terceros interesados- apelaron la decisión referida en la literal anterior. La Fundación citada argumentó que el auto que por esta vía reclama, no establece el efecto que se pretende dar a la protección provisional decretada en primera instancia, ni contiene la fundamentación que debe tener una resolución judicial. El Ministerio Público indicó que el acto reclamado no lesionó agravio en la esfera jurídica de los derechos de la amparista, puesto que fue emitido en el ejercicio de las facultades de la Junta denunciada quien efectuó el análisis de los hechos sometidos a su conocimiento.

**CONSIDERANDO**

Conforme a lo preceptuado en el Artículo 27 de la Ley de Amparo,

  
CIP-JFDV

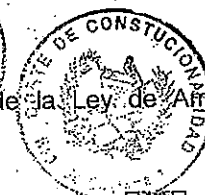
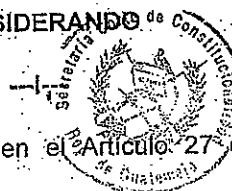
  
CIP-DO

  
BIC-PIP

  
GPPE-PIP

  
CIP-MGAI

  
REGORAL-PIP





15

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la suspensión del acto reclamado procede cuando a juicio del tribunal las circunstancias lo hagan aconsejable. Igualmente, el Artículo 28 del mismo cuerpo legal establece que esta debe otorgarse cuando se produzca alguno de los supuestos que se prevén en ese precepto.

---II---

Apreciados los hechos relatados por la postulante, con base en el análisis efectuado a la copia de la pieza de amparo de primer grado, la resolución que se conoce en alzada y el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República, a juicio de esta Corte, en el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina requerida; ni se dan los supuestos regulados en el artículo 28 ibidem, por lo que debe revocarse el numeral X de la resolución apelada y denegar el amparo provisional solicitado.

  
CPIP-JFOV

  
CPIP-DO

  
BM-CPIP

  
GFPE-CPIP

  
CPIP-MGAN

  
LEGAL-CPIP

#### LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268, 272 inciso c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 30, 149, 163 inciso c), 170 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89; 33 y 34 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad.

#### POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: I. Por inhibitorias de los Magistrados José Francisco De Mata Vela, Dina Josefina Ochoa Escribá, Neftaly Aldana Herrera, José Mynor Par Usen, María Cristina Fernández García, María de los Angeles Araujo Bohr y





CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Expedientes acumulados  
935-2017 y 1005-2017  
Página 5 de 6

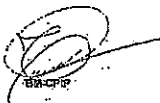
9  
16

María Consuelo Porras Argueta, se integra el Tribunal con el Magistrado Henry Philip Comte Velásquez y por sorteo obligatorio con los Magistrados José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández García. Asimismo, por razón de las inhibitorias referidas, asume la Presidencia en forma interina el Magistrado Bonerge Amilcar Mejía Orellana, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad. II. Con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Fundación Myrna Mack, por medio de la Representante Legal, Helen Beatriz Mack Chang y el Ministerio Público, por medio de la Agente Fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparós y Exhibición Personal, abogada Sara Edith Zamora Ordoñez—terceros interesados—

III. Revoca el numeral X de la resolución apelada y, resolviendo conforme a Derecho, deniega el amparo provisional solicitado. IV. Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase la copia del antecedente.

  
CPJP-JFDV

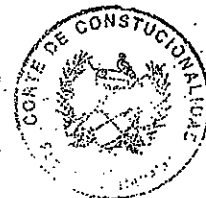
  
CPJP-DO

  
BJA-CPJP

  
GPPE-CPJP

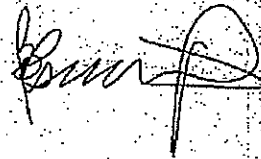
  
CPJP-MGNH

  
SECRETARÍA

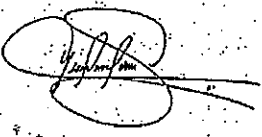




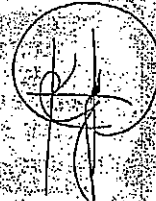
10  
17



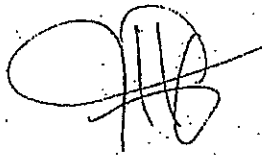
Firmado digitalmente  
por BONERGE  
AMILCAR MEJIA  
ORELLANA Fecha:  
26/06/2017 1:23:48 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad



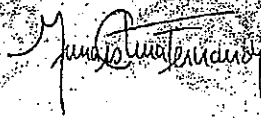
Firmado digitalmente  
por GLORIA  
PATRICIA PORRAS  
ESCOBAR Fecha:  
26/06/2017 1:26:18 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad



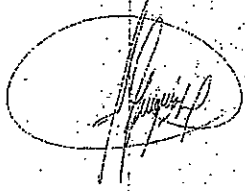
Firmado digitalmente  
por JOSE MYNOR  
PAR USEN Fecha:  
26/06/2017 1:30:17 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por HENRY PHILIP  
COMTE VELASQUEZ  
Fecha: 26/06/2017  
1:31:09 p. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por MARIA CRISTINA  
FERNANDEZ GARCIA  
Fecha: 26/06/2017  
1:31:48 p. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por MARTIN RAMON  
GUZMAN  
HERNANDEZ Fecha:  
26/06/2017 1:38:53 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad







11  
18

**EXPEDIENTE 2754-2017, 2767-2017 y 2802-2017**

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Guatemala, diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete que emitió la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo que promovió Silvia Patricia Valdés Quezada en su calidad de Magistrada Vocal Primero de la Corte Suprema de Justicia, contra la Junta de Disciplina Judicial. La postulante actuó con el patrocinio de la abogada Amarilis Ondina Navas Portillo. Es ponente en el presente caso la Magistrada Vocal III, Gloria Patricia Porras Escobar, quien expresa el parecer de este Tribunal.

**ANTECEDENTES**

**I. EL AMPARO**

**A) Interposición y autoridad:** presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal y, posteriormente remitido a la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala. **B) Acto reclamado:** resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete que emitió la Junta de Disciplina Judicial, que declaró sin lugar el recurso de reposición que interpuso la accionante contra la decisión de ese mismo órgano administrativo, que admitió a trámite la denuncia presentada en su contra por la Fundación Myrna Mack. **C) Violaciones que denuncia:** a los derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva, así como a los principios de





12  
19

seguridad jurídica, no hay delito ni pena sin ley anterior, y al debido proceso. D)

**Hechos que motivan el amparo:** de lo expuesto por la accionante y del estudio de

los antecedentes, se resume: **D.1) Producción del acto reclamado:** a) Helen

Beatriz Mack Chang, como representante legal de la Fundación Myrna Mack,

presentó denuncia en contra de la postulante ante la Junta de Disciplina Judicial,

argumentando que a través de "Twitter" se enteró que la ahora postulante, en su

calidad de Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia,

difundió mediante "Whatsapp" un comentario calumnioso y difamatorio contra su

persona y de la fundación que representa; b) en virtud de lo anterior, la Supervisión

General de Tribunales, luego de la investigación respectiva, recomendó no admitir a

trámite la denuncia referida; c) no obstante lo anterior, la autoridad denunciada

consideró que del análisis del Informe de investigación y de las actuaciones, era

procedente admitir a trámite la mencionada denuncia; y d) contra la decisión anterior

interpuso reposición, medio de impugnación que fue declarado sin lugar por medio

de la resolución que constituye el acto reclamado. **D.2) Agravios que denuncian:**

indica la solicitante que la autoridad objetada trasgredió sus derechos porque: a) de

conformidad con los artículos 11 literal b) y 50 de la Ley de la Carrera Judicial, la

Supervisión General de Tribunales tiene la calidad de ente investigador, y por ende

es quien debe corroborar si los hechos denunciados constituyen o no una falta,

como resultado de la investigación objetiva, y determinar si debe admitirse o no la

denuncia; b) del análisis del informe rendido por la Supervisión General de

Tribunales, en el que recomendó que no se admitiera la denuncia de marras, puede

advertirse que los hechos imputados no encuadran en ninguna de las faltas

expresamente reguladas por la Ley citada, por lo que a la luz del artículo 17 de la

Carta Magna, no puede iniciarse un proceso en su contra por la comisión de una



13  
20

supuesta falta que no está regulada en ley; c) la imputación del hecho, la calificación provisional y la fundamentación que contiene la decisión que admitió a trámite la denuncia, no concuerda con el Informe presentado por la Supervisión General de Tribunales, por lo que se trasgredió lo regulado en los artículos 51, 54 y 67 de la Ley mencionada, debido a que la calificación jurídica y la imputación de hechos corresponde hacerla a dicha Supervisión; d) al dar trámite a la denuncia en la forma en que lo hizo, la autoridad denunciada varió las formas del proceso, en virtud que no tomó en consideración el informe antes indicado, en el que se recomendó no admitir a trámite la denuncia referida; e) se trasgredió su derecho a una tutela judicial efectiva, porque el auto enjuiciado carece de fundamentación y no se encuentra ajustado a Derecho; f) los fallos constitucionales en los que la autoridad reclamada basó su decisión, son pronunciamientos emitidos con base en la Ley de la Carrera Judicial derogada, por lo que son inaplicables; y g) existe falta de fundamentación, porque no se pronunció sobre el examen de los medios de prueba que fueron aportados al proceso, y para admitir una denuncia deben existir indicios suficientes.

**D.3) Pretensión:** solicitó que se otorgue amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso definitivo el acto cuestionado, y se emita una nueva decisión en la que se declare con lugar el recurso de reposición incoado. **E) Uso de recursos:** ninguno. **F)**

**Casos de procedencia:** invocó los contenidos en las literales a), b), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. **G)**

**Leyes que se consideran violadas:** citó los artículos 2, 12, 17 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y 11, literal b), 50, 51 y 67 de la Ley de la Carrera Judicial.



## II. TRÁMITE DEL AMPARO

**A) Amparo provisional:** se otorgó. **B) Terceros interesados:** a) la Fundación



Myrna Mack, y b) la Supervisión General de Tribunales. **C) Informe circunstanciado:** la autoridad denunciada al rendir el informe requerido, presentó un resumen cronológico de las etapas procesales del procedimiento administrativo de mérito. **D) Remisión de antecedentes:** copia certificada del expediente 19-2017 de la Junta de Disciplina Judicial, que contiene la denuncia planteada por la Fundación Myrna Mack contra la amparista. **E) Medios de comprobación:** los aportados al proceso de amparo de primera instancia. **F) Sentencia de primer grado:** la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, **consideró:** "...este Tribunal Constitucional de Amparo procede analizar (sic) y a valorar los medios de prueba aportados por las partes procesales de la siguiente manera. 1) el Recurso de Reposición de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete presentado por la amparista en contra de la resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete emitida por la autoridad recurrida [Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial] en la cual resuelve admitir para su trámite la denuncia presentada por la señora Helen Beatriz Mack Chang en su calidad de representante legal de la Fundación Mima Mack en contra de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Silvia Patricia Valdés Quezada. Con dicho medio de prueba se acreditan cuáles fueron los agravios planteados por la amparista ante la autoridad recurrida siendo los siguientes 'que la Junta de Disciplina Judicial realice un análisis de la denuncia y de la investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales'. Otorgándole valor probatorio. 2) Resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete dictada por la Junta de Disciplina Judicial en donde resuelve sin lugar el Recurso de Reposición presentado por la amparista indicando que no le asiste la razón jurídica a





15  
22

la impugnante, porque lo que se pretende es que esta Junta de Disciplina Judicial valore algunos medios de investigación y por ende que se rechace la denuncia, lo cual no sería congruente al existir un hecho denunciado el cual confrontado con la ley posee una calificación jurídica que solamente después de haberse diligenciado los medios de prueba en audiencia es que la Junta de Disciplina Judicial puede darles o no valor probatorio a efecto de establecer con base a la misma si efectivamente existió hecho denunciado (sic) tal como fue planteado o si por el contrario no pudo ser probado siendo necesario llevar a cabo la audiencia señalada para agotar las fases procesales. A este medio de prueba también se le concede valor probatorio pues a través del mismo se establece que la autoridad recurrida no resolvió los agravios planteados por la amparista. El artículo 50 de la Ley de la Carrera Judicial en el quinto párrafo establece: La Supervisión de Tribunales (sic) tendrá la calidad de ente investigador en el respectivo procedimiento disciplinario. Si tuvo conocimiento directo de un hecho que pudiese calificarse como falta, iniciará inmediatamente la investigación correspondiente la que no podrá exceder de diez días debiendo notificar a la Junta de Disciplina Judicial del inicio de la investigación. En el informe incluirá el relato del hecho imputado y las pruebas obtenidas el artículo 51 del mismo cuerpo legal citado, en su tercer párrafo establece... Al recibir el informe de la Supervisión General de Tribunales la Junta emitirá inmediatamente resolución que contendrá: a)... b) señalamiento y precisión del hecho imputado por la Supervisión General de Tribunales, su calificación provisional y fundamentación. En el presente caso se ha establecido que la Supervisión General de Tribunales en su informe de investigación determinó que no encontró elementos suficientes para establecer que la conducta de la amparista haya conculcado disposiciones constitucionales ni las disposiciones contempladas en la literal f) de la Ley de la



Handwritten signature or mark.



16  
23

Carrera Judicial (sic) en relación con las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial contenidas en el Acuerdo 22-2013 (sic) y en consecuencia que su conducta se enmarque dentro de lo regulado en los Artículos 40, 41 y 42 de la Ley del Organismo Judicial como falta administrativa recomendando no admitir para su trámite la denuncia. Al tenor de los artículos citados este Tribunal ha establecido que la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial violentó a través de la resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete los Artículos 3 y 11 Bis del Código Procesal Penal y en consecuencia el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala pues en dicha resolución la autoridad recurrida no da respuesta a los agravios presentados por la amparista y fundamenta su resolución en sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad dictadas en base a la Ley de la Carrera Judicial ya derogada. 3) resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete dictada por la Junta de Disciplina Judicial en donde admite para su trámite la denuncia presentada en contra de la amparista por la señora Helen Beatriz Mack Chang en su calidad de representante legal de la Fundación Mirna Mack. En el numeral dos de dicha resolución la Junta de Disciplina Judicial al resolver indica que del análisis del Informe de Investigación y de las actuaciones, se admite para su trámite la denuncia a este medio de prueba (sic) se le concede valor probatorio ya que a través de la misma se determina que la Junta de Disciplina Judicial no se pronunció respecto a lo que recomendó la Supervisión General de Tribunales en el informe de investigación, tampoco realizó un razonamiento del porque a pesar de que dicho órgano recomendó no darle trámite a la denuncia planteada en contra de la amparista tomó la decisión de admitirla para su trámite lo que constituye falta de fundamentación en su resolución de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 Bis del Código



17  
24

Procesal Penal y una evidente violación al debido proceso. Así mismo en dicha resolución la Junta de Disciplina Judicial tomo como base para indicar los hechos señalados a la amparista los indicados por la parte denunciante no observando lo que al respecto indica el Artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial en el sentido de que el hecho imputado lo debe señalar la Supervisión General de Tribunales no el denunciante constituyendo ambas acciones una violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de conformidad con los Artículos 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al Artículo 3 del Código Procesal Penal. 4) Informe de investigación rendido por la Supervisión General de Tribunales dentro del expediente (...) donde indica el resultado de la investigación en donde recomienda no darle trámite a la denuncia presentada en contra de la amparista al cual se le otorga valor probatorio. 5) Expediente administrativo disciplinario (...) se le concede valor probatorio toda vez que en el mismo obran las resoluciones arriba mencionadas así como el informe de investigación los cuales ya fueron debidamente valorados. F) En base a los medios de prueba ya valorados este Tribunal constitucional de amparo concluye que le asiste la razón a la amparista en virtud que efectivamente se le vulnerado (sic) derechos fundamentales como lo es el debido proceso, el derecho de defensa, y la tutela judicial efectiva establecidos en el Artículo (sic) 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que la resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete no resuelve los agravios presentados por la amparista dentro de su Recurso de Reposición así mismo la Junta de Disciplina Judicial fundamentó su resolución en sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad dictadas en base a la Ley de la Carrera Judicial ya derogada mismas que no puede ser usadas (sic) para fundar su fallo ya que sobre la nueva Ley de la Carrera Judicial no existe



*[Handwritten signature]*

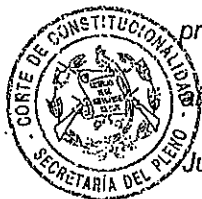


precedentes. Así mismo (sic) este Tribunal constitucional de amparo ha establecido que la resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete dictada por la autoridad recurrida también adolece de vicios de procedimientos, toda vez que carece de fundamentación, ya que la Junta de Disciplina Judicial sobre la admisibilidad de la denuncia planteada en contra de la amparista sólo manifiesta que lo hace en base al análisis del informe de investigación y de las actuaciones sin especificar por qué a pesar de que el Supervisión General de Tribunales recomendó no darle trámite, dicho junta (sic) decide admitirla, la cual incurre en una falta de fundamentación y repercute en el derecho de defensa al que por mandato constitucional le asiste a cualquier persona sometida a procedimiento. Así mismo (sic) en base a lo que establece el Artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que establece que el tribunal de amparo al dictar la sentencia examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente, examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes, este tribunal constitucional de amparo también ha establecido que dentro del procedimiento disciplinario establecido en la Ley de la Carrera Judicial para funcionarios judiciales [jueces y magistrados] existe una laguna legal ya que el Artículo 51 de dicha ley, no contempla el procedimiento disciplinario a seguir cuando la Supervisión General de Tribunales a través de su investigación establezca que no se recomienda admitir para su trámite la denuncia ya sea porque no existen medios de prueba o porque no se ha cometido una falta administrativa, esta circunstancia no está prevista en la ley y esto viola el principio de legalidad y como consecuencia el debido proceso. El Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica en su último párrafo que 'ninguna persona puede ser juzgada por





Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente'. El Artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 32-2016 del Congreso de la República establece que en la tramitación del procedimiento por infracciones administrativas, deben de respetarse varios principios y se mencionan los que son de mayor aplicabilidad al caso se resuelve (sic) de legalidad, favorabilidad, derecho de defensa, debido proceso, objetividad, en ese sentido también esta ley en el Artículo 67 establece que se deben aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal y al respecto el Artículo 14 del Código Procesal Penal establece en el segundo párrafo que la analogía y la interpretación extensiva quedan prohibidas mientras no le favorezcan al acusado y en el último párrafo se establece que la duda favorece al imputado, al existir una laguna legal sobre el procedimiento a seguir por parte de la Junta de Disciplina Judicial cuando la Supervisión General de Tribunales determine que no debe admitirse para su trámite la denuncia presentada, este Tribunal estima que debe de aplicarse el principio favor rei o de favorabilidad como le llama la Ley de la Carrera judicial al momento de resolver y no crear o aplicar procedimientos que no están establecidos en la ley como ha sucedido en este caso en donde la Junta de Disciplina realizó la imputación de los hechos con base a lo que indicó la denunciante y no como lo establece la ley violentándose así el principio de legalidad y el debido proceso. Por lo que en ese sentido lo procedente es declarar con lugar la



presente acción de amparo revocando la resolución de fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete, ordenando a la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial que resuelva el Recurso de Reposición planteado por la Amparista, con base en lo ya considerado y lo establecido en la ley...". Y resolvió: "...I. Otorga el amparo planteado por Silvia Patricia Valdés Quezada en calidad de Magistrada

*[Handwritten signature]*



20  
27

Vocal Primera de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (sic); II. En consecuencia se revoca la resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete; III. Para los efectos positivos del presente fallo, la autoridad impugnada deberá dictar nueva resolución en donde resuelva el recurso de Reposición planteado por la Amparista de conformidad con lo anteriormente considerado; dentro de un plazo que no exceda de cinco días, contados a partir de que la presente resolución cause firmeza, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento incurrirá (sic) en una multa de dos mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes; IV. No se hace especial condena en costas procesales...”.

### III. APELACIÓN

A) El Ministerio Público apeló y argumentó que la autoridad denunciada al emitir la decisión enjuiciada, actuó en ejercicio de las facultades que se le han conferido y sin ocasionar los agravios expuestos por la peticionaria, en virtud que analizó los aspectos impugnados, los que le permitieron arribar a la conclusión que la reposición planteada era improcedente y, como consecuencia, debía admitirse para su trámite la denuncia planteada contra la ahora accionante. Solicitó que se declare con lugar el recurso planteado y, como consecuencia, se revoque el fallo de primer grado. B)

La Fundación Myrna Mack, tercera interesada, apeló y manifestó que el *a quo* al emitir su decisión, efectuó un análisis subjetivo del caso concreto, desnaturalizando la acción de amparo, constituyéndola en una instancia revisora de lo actuado por los órganos comunes, lo que es totalmente improcedente. Afirmó que la autoridad denunciada al proferir el acto reclamado no ocasionó las violaciones aducidas por la interesada, en virtud que actuó apegada a Derecho, de ahí que el hecho que lo resuelto sea contrario a los intereses de la ahora peticionaria, no significa que se



21  
20

hayan vulnerado derechos que ameriten protección constitucional. Solicitó que se declare con lugar el recurso incoado y, como consecuencia, se revoque la sentencia de primer grado.

#### IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A) La accionante manifestó que los recursos de apelación no cumplen con el presupuesto establecido en el artículo 18 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, en virtud que no contienen la motivación debida, puesto que los argumentos expuestos constituyen aseveraciones generales que no tienen relación con el caso concreto. Argumentó que los fallos citados en el acto reclamado son inaplicables al asunto de mérito, en virtud que no hacen referencia a la nueva Ley de la Carrera Judicial, sino de la anterior. Señaló que la decisión enjuiciada le causa agravio, porque al haberse admitido para su trámite la denuncia de marras, es posible que sea suspendida en el ejercicio de su cargo, agregado al hecho que, por haberse admitido la misma, en la forma en que se hizo, se violan los principios del proceso acusatorio. Solicitó que se declaren sin lugar las apelaciones promovidas y, como consecuencia, se confirme la decisión de primer grado. B) La Fundación Myrna Mack, tercera interesada, reiteró los argumentos que expuso en su escrito de apelación, y agregó que conforme los artículos 8, 325 y 326 del Código Procesal Penal y el principio de imperatividad, aplicables supletoriamente, el ente investigador tiene la facultad de solicitar el sobreseimiento o la clausura provisional, sin embargo, el Juez tiene la autoridad para rechazar esa solicitud y ordenar que se presente la acusación correspondiente, de ahí que la autoridad denunciada al admitir a trámite la denuncia a pesar de haberse recomendado no hacerlo, actuó en ejercicio de sus facultades. Manifestó que el acto reclamado contiene la fundamentación debida, en virtud que contiene los elementos que permitieron a la autoridad reprochada denegar el



Handwritten signature or mark.



12  
JA

recurso planteado. Solicitó que se declare con lugar la apelación interpuesta y, como consecuencia, se revoque la decisión de primer grado. **C) La Supervisión General de Tribunales, tercera interesada**, indicó que si bien, de conformidad con lo regulado en el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, corresponde a la Junta de Disciplina Judicial admitir o no a trámite una denuncia, ésta decisión debe tomarse con sustento en los resultados obtenidos por la investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales, porque a esta última es a quien legalmente le corresponde efectuar la imputación del hecho. Expuso que de la lectura de la sentencia de amparo impugnada no se advierte la concurrencia de los agravios expuestos por los impugnantes, así como tampoco se logra advertir que se haya realizado un análisis subjetivo del caso concreto. Solicitó que se declaren sin lugar las apelaciones planteadas. **D) El Ministerio Público** indicó que no comparte el criterio sostenido por el *a quo*, en virtud que el amparo es improcedente cuando la decisión impugnada ha sido emitida en ejercicio de las facultades que la Ley le otorga a la autoridad cuestionada y sin que se advierta la comisión de agravios. Expuso que la Junta de Disciplina Judicial actuó conforme lo regulado en el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, porque será luego de que se lleve a cabo la audiencia respectiva (en la que las partes presenten los medios de prueba correspondientes), que la Junta mencionada podrá resolver el fondo de la controversia, y no al inicio del proceso, como lo pretende la interesada, circunstancia que guarda relación con lo que para el efecto resolvió esta Corte en el expediente 2845-2015 (aplicable aunque se trate de una Ley anterior). Solicitó que se declaren con lugar los recursos de apelación y, como consecuencia, se revoque la decisión que se conoce en grado.

#### CONSIDERANDO





13  
30

- I -

No causa afectación a los derechos constitucionalmente reconocidos, la decisión de la Junta de Disciplina Judicial que, al resolver un recurso de reposición, confirma la decisión de admitir a trámite una denuncia presentada contra un funcionario judicial, porque será en el proceso respectivo, que se determinará si el hecho imputado es constitutivo de falta o no.

- II -

Silvia Patricia Valdés Quezada solicita amparo contra la Junta de Disciplina Judicial, señalando como agravante la resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de reposición que interpuso contra la decisión de ese mismo órgano administrativo, que admitió a trámite la denuncia presentada en su contra por la Fundación Myrna Mack. Aduce la accionante que ese proceder supone conculcación a sus derechos, por los motivos que quedaron reseñados en el apartado de Antecedentes del presente fallo.

- III -

La *quid iuris* del asunto que se somete a conocimiento de la justicia constitucional, consiste en el hecho que la autoridad denunciada, al resolver, declaró sin lugar el recurso de reposición que la ahora peticionaria planteó contra la resolución por medio de la cual la Junta de Disciplina Judicial admitió a trámite la denuncia presentada por la Fundación Myrna Mack en su contra, a pesar que la Supervisión General de Tribunales recomendó no admitir a trámite dicha denuncia.

Al respecto es preciso traer a colación lo que para el efecto regula el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, que literalmente preceptúa: "*Procedimiento. Recibida la denuncia la Junta de Disciplina Judicial, decidirá sobre su admisibilidad. Contra esta resolución, cualquiera de las partes podrá interponer, dentro del plazo*



*[Handwritten signature]*



24  
31

de tres días siguientes a su notificación, recurso de reposición en forma escrita ante la misma Junta, el que se resolverá dentro del plazo de dos días después de su presentación. Contra la resolución que decide la reposición no cabrá otro recurso. Resuelta la reposición confirmando la continuidad del trámite o transcurrido el plazo sin que se haya recurrido, la Junta de Disciplina Judicial, ordenará a la Supervisión General de Tribunales, en caso de no haberla hecho de oficio, realizar la investigación pertinente (...), debiendo a su término presentar el informe con la respectiva imputación del hecho y pruebas recabadas. El plazo podrá ser ampliado (...), a solicitud de la Supervisión General de Tribunales, en consideración de la complejidad del asunto o de la prueba. Al recibir el informe de la Supervisión General de Tribunales, la Junta emitirá inmediatamente resolución, la cual contendrá: a) Individualización del quejoso y funcionario denunciado; b) Señalamiento y precisión del hecho imputado por la Supervisión General de Tribunales, su calificación provisional y fundamentación; c) Citación de las partes y del denunciado a la audiencia señalada, con la advertencia de continuar el trámite en rebeldía. (...) d) Información al denunciado de su derecho de ejercer su defensa material y técnica personalmente o nombrando abogado de su confianza, así como de comparecer a la audiencia con las pruebas pertinentes..."

Del estudio del caso concreto, se advierte que: a) el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la Fundación Myrna Mack presentó denuncia contra la ahora accionante, exponiendo los motivos por los que estima que la funcionaria pública cometió una falta en el ejercicio de su cargo (folios 1 al 4 del antecedente del amparo); b) la Junta de Disciplina Judicial, previo admitir a trámite la denuncia, ordenó a la Supervisión General de Tribunales que investigara el hecho denunciado (folio 32 del antecedente del amparo); c) el dos de febrero del mismo año, la



25

32

Supervisión mencionada rindió informe de investigación, en el que recomendó no admitir a trámite la denuncia (folios 34 al 45 de la pieza que constituye el antecedente de la presente acción); d) recibido el informe mencionado, el siete del mes y año relacionados, la Junta de Disciplina Judicial emitió resolución, en la que en el apartado conducente indicó: "...II. Del análisis del informe de investigación y de las actuaciones, se admite para su trámite la denuncia presentada por Helen Beatriz Mack Chang, en su calidad de Representante Legal de la Fundación Myrna Mack, en contra de la abogada Silvia Patricia Valdés Quezada, en su calidad de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, por lo que en consecuencia se le señala el siguiente hecho de acuerdo a la denuncia presentada: '(...) Con su actuar incurrió en la falta grave establecida en el artículo 41 literal f), de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, consistente en falta de acatamiento de las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial, contenidas en el Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia'. Para que todas las partes comparezcan ante la Junta de Disciplina Judicial, a discutir el hecho denunciado, se señala audiencia..."; y e) la ahora accionante planteó reposición, recurso que fue resuelto mediante la decisión que constituye el acto reclamado, en la que la Junta de Disciplina Judicial consideró que, con base en el análisis de la resolución recurrida, las actuaciones y los argumentos expuestos por la impugnante, la pretensión de la interesada es que se valoren "algunos de los medios de investigación" y, por ende, que se rechace la denuncia, circunstancia que es improcedente por existir un hecho que encuadra en una calificación jurídica, por lo que solamente después de haberse diligenciado los medios de prueba, la Junta puede otorgarles valor probatorio o no, respaldando su criterio en fallos emitidos por esta Corte (folios 299 al 301 del antecedente del



*[Handwritten signature]*



26  
33

presente amparo).

Esbozadas las circunstancias en que fue emitido el acto enjuiciado, la transcripción del apartado conducente del artículo 51 *ibíd*, y del análisis de los agravios expresados por la amparista en la presente acción constitucional, este Tribunal no advierte la concurrencia de las trasgresiones aducidas, en virtud que la Junta de Disciplina Judicial, al emitir el acto reclamado, actuó en ejercicio de sus facultades, porque conforme la norma citada, es a ella a quien compete decidir sobre la admisibilidad de las denuncias presentadas contra los Jueces y Magistrados, sin que sea óbice para ello, el hecho que la Supervisión General de Tribunales "*recomiende*" no admitir a trámite la denuncia. Asimismo, en los casos como el que ahora se conoce, es evidente que el simple hecho de admitir a trámite la denuncia presentada contra un funcionario judicial, no es susceptible de ocasionar agravio, porque será durante la secuela procesal respectiva que, conforme los medios de prueba que las partes aporten al proceso, se decidirá si el hecho imputado constituye o no una falta. Además, quien se considere afectado por la decisión que en su momento emita la Junta referida, puede plantear apelación de conformidad con lo regulado en el artículo 63 de la Ley de la Carrera Judicial, con el propósito que la Junta de Disciplina Judicial de Apelación conozca en alzada y examine el pronunciamiento correspondiente, circunstancias que son congruentes con el principio jurídico del debido proceso y derecho de defensa respectivos. Por lo anteriormente expuesto, esta Corte no advierte la concurrencia de los agravios denunciados por la accionante, en virtud que la autoridad razonó adecuadamente su decisión y actuó en ejercicio de las facultades que se le han conferido, sin trasgredir los derechos constitucionales que le asisten a Silvia Patricia Valdés Quezada.

Respecto al argumento expuesto por la amparista, consistente en que la





27  
34

autoridad reprochada basó su decisión en sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y este Tribunal, en las que se resolvieron controversias basadas en la Ley de la Carrera Judicial anterior, se estima que dicho reclamo no configura trasgresión a los derechos de la accionante, en virtud que esos pronunciamientos fueron citados con el único propósito de hacer énfasis en que, admitir a trámite una denuncia presentada contra un funcionario judicial, no configura violación alguna, por lo que respecto a ese tópico, no se advierte la violación señalada por la interesada.

Por lo considerado se estima que el amparo planteado es notoriamente improcedente, por lo que debe denegarse, y habiéndose resuelto en distinto sentido por el *a quo*, debe revocarse el fallo que se conoce en alzada, emitiendo la sentencia que en Derecho corresponde, en la que se condene en costas procesales a la accionante, por existir sujeto legitimado para su cobro, y se imponga la multa respectiva a los abogados patrocinantes, de conformidad con lo regulado en los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

#### LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268, 272 inciso c), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 8, 10, 42, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 149, 163 Inciso c), 170, 185, 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 1 y 7 Bis del Acuerdo 3-89 y 18, 19, 36 del Acuerdo 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad.

#### POR TANTO

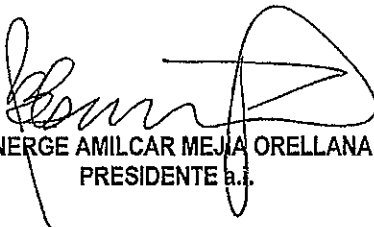
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: I) De conformidad con el auto de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Tribunal queda integrado con los Magistrados Bonerge Amilcar Mejía



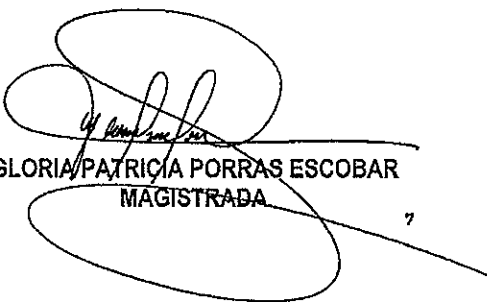


18  
35

Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Henry Philip Comte Velásquez, María Cristina Fernández García y María de los Angeles Araujo Bohr, respectivamente, para conocer y resolver el presente asunto, asimismo, asume la Presidencia de forma interina el Magistrado Bonerge Amilcar Mejía Orellana, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad. II) **Con lugar** los recursos de apelación interpuestos por Fundación Myrna Mack, tercera interesada, y el Ministerio Público; como consecuencia, **revoca** la sentencia que se conoce en alzada, y resolviendo conforme a Derecho: **a. Deniega** el amparo solicitado por Silvia Patricia Valdés Quezada contra la Junta de Disciplina Judicial; **b. Condena** en costas a la postulante, y **c. Impone** multa de un mil quetzales (Q. 1,000.00), a cada uno de los abogados patrocinantes, Amarilis Ondina Navas Portillo y Carlos Enrique Ortega Salguero, quienes deberán hacerla efectiva en la Tesorería de esta Corte, dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de que cause firmeza el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. III) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.



BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA  
PRESIDENTE a.i.



GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR  
MAGISTRADA




HENRY PHILIP COMTE VELÁSQUEZ  
MAGISTRADO

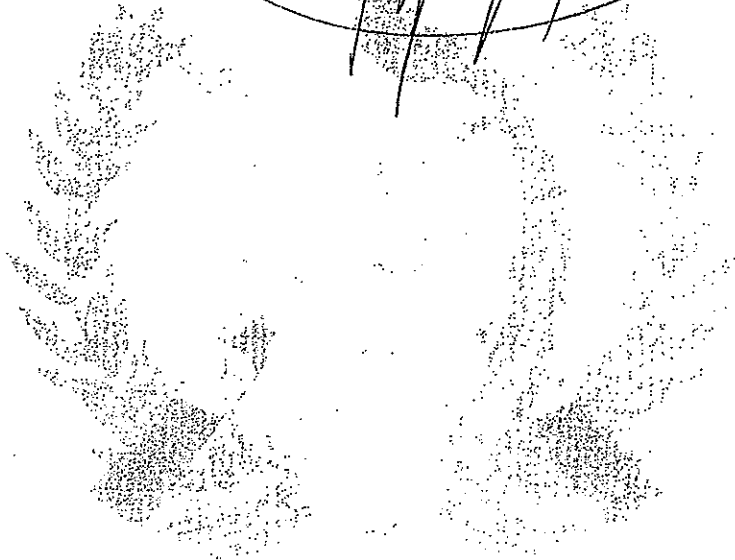
2

29  
36

  
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA  
MAGISTRADA

  
MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR  
MAGISTRADA  
Voto razonado disidente

  
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ  
SECRETARIO GENERAL



10

30  
37

SE DETUVO APERTURA A JUICIO

## Sala de femicidio amparó a Alejos en Caso Negociantes de la Salud

Por Diario La Hora - 19 septiembre, 2016



Por José del Águila  
jaguila@lahora.com.gt

Un amparo provisional a favor de Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia, detuvo la audiencia de apertura a juicio en el caso conocido como "Negociantes de la salud". El amparo fue concedido por la Sala de Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Delitos Contra la Mujer.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), confirmó el amparo concedido a favor del sindicado y explicó que éste se dio en relación a la ampliación del auto de procesamiento.

No obstante, según explicó Sandoval, al tratarse de un amparo, los tribunales no hacen mayor razonamiento en su resolución.

El pasado 23 de marzo, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imputaron nuevos hechos a Alejos Cámbara ante el Juzgado Sexto de Instancia Penal, con lo que se buscaba probar su participación en una estructura vinculada a actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El pasado 13 de septiembre, el Ministerio Público (MP), a través de la FECI, solicitó, en base de los medios de prueba recabados, que los 14 supuestos integrantes de la estructura "Negociantes de la Salud", entre los cuales se

11



encuentra Alejos, enfrentaran juicio oral y público, por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Las pruebas presentadas fueron 46 escuchas telefónicas, informes y documentos contables. Con esto, el MP y la CICIG buscan dejar constancia de que Alejos utilizó sus influencias para que el IGSS beneficiara con contratos millonarios en la compra de medicamentos a varias de sus empresas.

#### ANTECEDENTES

El pasado 27 de octubre, el MP y la CICIG anunciaron en conferencia de prensa la desarticulación de una supuesta red de corrupción que operaba en el IGSS y que estaría conformada por empleados de esa institución, funcionarios y personas particulares.

De acuerdo a las pesquisas, el modo de operar era que algunos proveedores de servicios médicos y medicamentos, acudían a operadores para que estos procuraran la venta de sus productos al IGSS. Según detallaron las autoridades, entre las empresas beneficiadas se encuentran varias ligadas a Gustavo Alejos.

Este no es el único caso en el que Alejos se encuentra involucrado, ya que el pasado 27 de julio fue ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito en el caso denominado "Cooptación del Estado".

Diario La Hora

100

32  
39

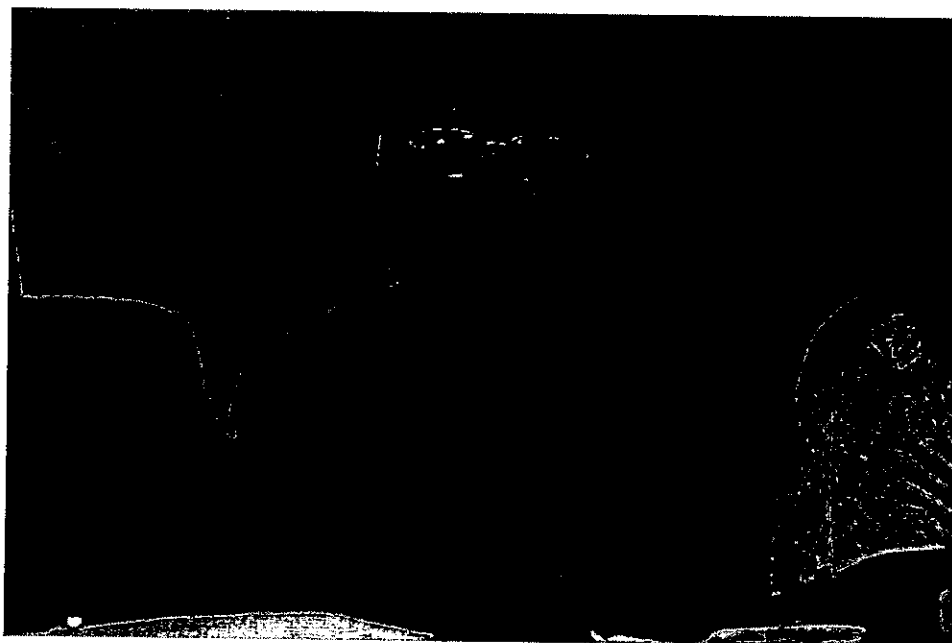


ACTUALIDAD 360, GUATEMALA

## Sala de Femicidio ampara provisionalmente a Magistrada Stalling

12/04/2017 · 1 MINUTO LEER

Get Notifications



Fuente: Prensa Libre

El Juez Adrián Rodríguez, suspendió la audiencia en el Juzgado Séptimo, debido a que la Sala de Femicidio amparó provisionalmente a la magistrada Blanca Stalling, esto referente al abandono de la defensa.



***El Ministerio Público propuso como anticipo de prueba la declaración del juez Carlos Ruano, quien no pudo declarar por dicha suspensión.***



33

40

La audiencia se llevará a cabo hasta que el amparo sea rechazado o confirmado por la sala de Femicidio.

Stalling enfrenta proceso por tráfico de influencias, ya que aprovechándose de su puesto presionó al juez Carlos Ruano, para beneficiar a su hijo Otto Molina Stalling, quien está involucrado en el caso "Negociantes de la salud", por asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

Get Notifications

f LIKE

TWEET



ELECONOMISTA

ACTUALIDAD 360 GUATEMALA

FMI motiva a invertir en innovación  
y educación para incrementar la  
productividad

12/04/2017

VER PUBLICACIÓN

El MP presentó apelación contra  
medidas sustitutivas en caso Hogar  
Seguro

12/04/2017

VER PUBLICACIÓN

## ¡Suscríbete a nuestro newsletter!

Información importante para ti

Enter Email

☐ Al marcar esta casilla, confirma que ha leído y está de acuerdo con nuestros términos de uso con respecto al almacenamiento de los datos enviados a través de este formulario.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE



**Datos de las personas o entidades que presentan el impedimento:**

<b>1. Nombre:</b>	José Pablo Juárez Herrarte
<b>Documento Personal de Identificación:</b>	3017 39242 0101
<b>Profesión:</b>	Estudiante
<b>Estado Civil:</b>	Soltero
<b>Domicilio:</b>	Guatemala, Guatemala
<b>Dirección para ser notificado:</b>	13 calle 2-14 zona 1, ciudad de Guatemala
<b>Teléfono:</b>	2463-2323
<b>Correo electrónico:</b>	contacto@alianzareformas.org

**Firma de la persona que presenta el impedimento:**A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and vertical strokes, positioned below the signature label.

11/15/2020  
11/15/2020  
11/15/2020









COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS  
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
**2019-2024**

**FICHA DE PRESENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS  
DE PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS**

Fecha: 04 de febrero de 2020 Número de Expediente: 44  
Nombres y Apellidos del Postulante: Henry Alejandro Elías Wilson  
Denunciante: José Pablo Juárez Herrera DPI: 3017392470101  
Institución: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: \_\_\_\_\_  
Dirección Física: 13 Calle 2-14 zona 1 Ciudad de Guatemala  
Dirección Electrónica: contacto@AlianzaReformas.org  
Teléfono (s): 2463 1323

FIRMA

**NOTA IMPORTANTE:**

Adjuntar copia legible del DPI con fotografía clara.

Fotocopia legalizada de nombramiento de Representante Legal.



12

Guatemala, 4 de febrero de 2020

Señores/as miembros/as de la Comisión de Postulación para selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, período 2019-2024, con base en lo establecido en la Constitución Política de la República, la ley de Comisiones de Postulación decreto número 19-2009, la Ley de la Carrera Judicial decreto número 32-2016 y en atención a la publicación de fecha 31 de enero de 2020 en diarios de mayor circulación, en la cual invita a cualquier persona jurídica o individual a presentar impedimentos a los aspirantes que continúan en el proceso de selección, se hace saber a la Comisión de la existencia del siguiente:

**IMPEDIMENTO:**

<b>Datos del o la aspirante contra quien se presenta el impedimento:</b>	
<b>Nombre:</b>	Henry Alejandro Elías Wilson
<b>Número de expediente</b>	44
<b>Motivo:</b>	
<p>Falta de imparcialidad con la justicia e independencia en el ejercicio profesional, esto en relación a las incompatibilidades, incapacidades e impedimentos contempladas en el apartado referente a los aspectos éticos (inciso B del perfil de los participantes) con los que deben cumplir los aspirantes y que fue aprobado por esta honorable Comisión de Postulación:</p>	
<b>Información sobre el o la postulante:</b>	
<p>Actualmente el licenciado Henry Alejandro Elías Wilson forma parte de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Guatemala.</p>	
<b>Hechos en los que se fundamenta la objeción:</b>	
<p>El día 23 de febrero de 2017, la Sala de la Corte de Apelaciones que integra el Licenciado Elías Wilson constituida como Tribunal Constitucional de Amparo admite para trámite acción de amparo planteado por Silvia Patricia Valdés Quezada y otorga Amparo Provisional. La entonces Magistrada Valdés Quezada buscaba dejar sin efecto el diligenciamiento de audiencia agendada por la Junta de Disciplina Judicial para el 24 de febrero de 2017. La audiencia en cuestión para la cual fue citada la entonces Magistrada Valdés Quezada se da por una denuncia de difamación realizada por la activista de Derechos Humanos Helen Mack Chang, puesto que la entonces Magistrada difundió mensajes difamatorios vertidos por el Sr. Ricardo Méndez Ruíz por razón de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente la Fundación Myrna Mack apeló lo resuelto por el Tribunal integrado por el Licenciado Elías Wilson y derivado de dicha apelación, Corte de Constitucionalidad, el 26 de junio de 2017 resuelve lo siguiente: <i>"apreciados los hechos relatados por la postulante, con base en el análisis efectuado a la copia de la pieza de amparo de primer grado; la resolución que se conoce en alzada y el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República, a juicio de esta Corte, en el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina</i></p>	



*requerida, ni se dan los supuestos regulados en el artículo 28 ibídem, por lo que debe revocarse el numeral X de la resolución apelada y denegar el amparo provisional solicitado."*

Posteriormente, el 19 de abril de 2018 Corte de Constitucionalidad resuelve como tribunal de segunda instancia lo siguiente: *"No causa afectación a los derechos constitucionales reconocidos, la decisión de la junta de disciplina judicial que, al resolver un recurso de reposición, confirma la decisión de admitir a trámite una denuncia presentada contra un funcionario judicial, porque será en el proceso respectivo, que se determinará si el hecho imputado es constitutivo de falta o no. (...) Por lo considerado se estima que el amparo planteado es notoriamente improcedente, por lo que debe denegarse, y habiéndose resuelto en distinto sentido por el a quo debe revocarse el fallo que se conoce en alzada, emitiendo la sentencia que en Derecho corresponde (...)"*

Asimismo, el Licenciado Elías Wilson actuando como miembro de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala también favoreció con amparo provisional al Sr. Gustavo Alejos Cámbara por el caso conocido popularmente como "Negociantes de la salud". También dicha sala otorgó amparo provisional a la magistrada separada Blanca Aída Stalling Dávila esto por el diligenciamiento del proceso donde la magistrada separada es sindicada de tráfico de influencias, derivado de la participación de su hijo en el caso "Negociantes de la salud". En este sentido, puede observarse un sesgo en la forma de resolver de parte del Licenciado Elías Wilson respecto estos casos.

De igual forma es necesario señalar que el día 22 de enero de 2016, el Sr. Enrique Nils Pira Ortega remitió denuncia nueva a la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público contra la secretaria de la sala, notificadores Y CONTRA QUIENES RESULTAREN RESPONSABLES. Dicha denuncia responde a la comisión de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias puesto que el día 15 de diciembre de 2015, notificaron auto que decreta amparo provisional sin las firmas de los magistrados de la Sala. En ese mismo orden de ideas, el veintiséis de enero de 2016 la auxiliar fiscal I de la Fiscalía de Sección Contra la Corrupción recibe denuncia interpuesta por Luis Roberto Castellanos por el mismo caso e indicando que la denuncia es CONTRA TODAS LAS PERSONAS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Por razón de dichas denuncias, el caso es conocido por la entonces Fiscal de Sección de Delitos Administrativos, HEIDY TAMARA DE LEÓN MUÑOZ, persona con la que el Lic. Elías Wilson procreó una hija, extremo que se puede acreditar con los medios de prueba presentados. Asimismo, se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios correspondientes a quien corresponda dentro del Ministerio Público para que faciliten las actuaciones del expediente MP001-2017-33223, en el cual se determina que la Licda. De León Muñoz indicó la forma en la que debería abordarse la denuncia planteada contra la Sala en la que se desempeña como magistrado el Licenciado Elías Wilson.

Esto es de vital importancia pues presume colusión en la investigación, esto en aras de favorecer al Licenciado Elías Wilson respecto la denuncia realizada contra la Sala por la notificación de actuaciones inexistentes dentro de los procesos que tramitan.





**Conclusiones:**

Tal como se ha expuesto en los párrafos previos, la judicatura donde se desempeña el Licenciado Elías Wilson ha sido señalada mediáticamente de favorecer con amparos provisionales a personajes de la vida política del país y que han sido sujetos a investigación, como en los casos mencionados en este escrito. Asimismo, las denuncias realizadas por peticionarios respecto la forma de actuar de la sala en cuestión genera suspicacia pues la investigación realizada fue dirigida por la madre de la hija del Licenciado Elías Wilson, situación que a todas luces no responde a los criterios de objetividad e imparcialidad que debe tener un administrador de Justicia.

**Solicitud.**

Solicitamos a esta honorable Comisión de Postulación que pondere en su justa dimensión los señalamientos realizados contra el Licenciado Elías Wilson, asimismo que solicite las actuaciones de la investigación realizada por la Fiscalía de Delitos Administrativos cuando la madre de la hija del Licenciado Elías Wilson se desempeñaba como fiscal. Esta investigación debe ser analizada con detenimiento pues presenta indicios de colusión entre la Licenciada De León Muñoz y el Licenciado Elías Wilson, en aras de solventar el problema para sí. De tal suerte, también indicamos a esta honorable comisión que al momento de elaborar el listado de candidatos elegibles que se remitirá al Congreso de la República de Guatemala, que no tome en cuenta al Licenciado Elías Wilson por no contar con el perfil de idoneidad, objetividad e imparcialidad necesario para desempeñar tal investidura.

**Medios de prueba que se adjuntan para respaldar el impedimento:**

- Copia simple de resolución de Sala de Femicidio donde otorga amparo provisional a Silvia Patricia Valdés Quezada;
- Copia simple de resolución de Corte de Constitucionalidad donde revoca el amparo provisional otorgado por la Sala de Femicidio en favor de Silvia Patricia Valdés Quezada;
- Copia simple de resolución de Corte de Constitucionalidad donde revoca en definitiva el amparo provisional otorgado por la Sala de Femicidio en favor de Silvia Patricia Valdés Quezada;
- Copia simple de nota de prensa donde indican que Sala de femicidio favoreció con amparo a Gustavo Alejos por caso Negociantes de la Salud;
- Copia simple de nota de prensa donde señalan que la Sala de apelaciones de femicidio favoreció con amparo provisional a la magistrada separada Blanca Aída Stalling Dávila;
- Se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios necesarios al Ministerio Público para que facilite las declaraciones testimoniales vertidas en calidad de testigo de la Señora Alejandra Paola Flores López dentro del expediente MP001-2017-3323;
- Se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios necesarios para que Ministerio Público facilite la declaración testimonial en calidad de testigo del Sr. Ever Alejandro Pérez Arriaza que constan dentro del expediente MP001-2017-33223;
- Se solicita a esta honorable comisión de postulación que gire los oficios necesarios para que el Ministerio Público facilite la denuncia de fecha 16 de marzo de 2016 y que se identifica con el número MP001-2016-25292 planteada por la ASOCACIONES NACIONAL DE AVICULTORES por medio de su representante legal CARLOS GUSTAVO PALACIOS MORALES contra cualquier persona que resultare responsable por los malos manejos y notificación de actuaciones inexistentes dentro de la Sala de Apelaciones de Femicidio donde labora el Licenciado Elías Wilson.





4  
38 10

OFICIO No. _____
REFERENCIA No. _____

**AMPARO 09-2017**  
**No. Único 01184-2017-00007**  
Junta de Disciplina Judicial  
Ref.: 019-2017, Of. III

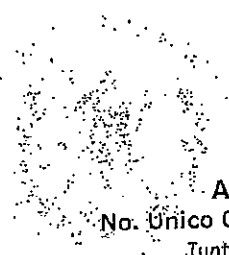
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA SEXUAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE AMPARO. GUATEMALA, VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

I. Por recibidos el memorial y documentos que anteceden, con los mismos inicie la pieza respectiva; II. Se toma nota que la solicitante SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA, actúa en calidad de Magistrada Vocal Primera de la Corte Suprema de Justicia, conforme al documento que acredita dicha personería; III. Se toma nota que la solicitante actúa bajo la dirección y procuración de la abogada Amarilis Ondina Navas Portilla, así como del lugar señalado para recibir notificaciones; IV. Se toma nota de la dirección indicada para notificar a la autoridad denunciada; V. Se toma nota del tercero con interés propuesto y del lugar señalado para notificarle; VI. Se admite para su trámite la presente Acción Constitucional de Amparo promovida en contra de la JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL; VII. Que dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, la autoridad denunciada remita a este Tribunal de Amparo lo siguiente: A) Informe Circunstanciado relacionado al antecedente del presente Amparo, debiendo cumplir con lo regulado en el primer párrafo del artículo 25 del Acuerdo Número 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad; B) Copia certificada de las resoluciones de fechas siete y quince, ambos de febrero del año dos mil diecisiete y del escrito mediante el cual la solicitante plantea Recurso de Reposición en contra de la resolución de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete; C) Listado de todas las partes dentro del proceso, indicando nombres y direcciones para ser notificados, caso contrario, deberá oficiar si fuera necesario a donde corresponda a efecto de que se remita lo solicitado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá de conformidad con lo



5

11

  
**AMPARO 09-2017**  
No. Único 01184-2017-00007  
Junta de Disciplina Judicial  
Ref.: 019-2017, Of. III

regulado por el artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; VIII. Que por ser parte en el presente Amparo, se previene a la autoridad denunciada para que en el plazo anterior, cumpla con lo preceptuado en el artículo 79 del Código Procesal Civil, párrafo segundo, ya que de lo contrario se le seguirá notificando por los estrados de este Tribunal; IX. Se tienen por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo del memorial que se resuelve; X. De conformidad con lo establecido en la literal b) del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, este Tribunal considera procedente **DECRETAR EL AMPARO PROVISIONAL** solicitado, en virtud que según la documentación adjunta al memorial de interposición del presente Amparo, con fecha siete de febrero del año en curso, la Junta de Disciplina Judicial, señaló audiencia para el veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, a las once horas con treinta minutos, en la cual convocan a la solicitante y a las otras partes a comparecer ante esa dependencia, audiencia que al desarrollarse dejaría sin materia el presente Amparo, por lo que en consecuencia, se deja en suspenso la resolución de fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete -acto reclamado-; XI. Previo a confirmar o revocar el Amparo Provisional decretado, que la autoridad denunciada remita a este Tribunal el Informe solicitado; XII. En cuanto a lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad procesal; XIII. Notifíquese. -----

ARTÍCULOS: 203, 204 y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 33 y 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 108, 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 4º del Auto Acordado Número 1-2013; 7, 8, 9, 10 y 14 del Acuerdo Número 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad. -----



EXPEDIENTES ACUMULADOS 935-2017 Y 1005-2017

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintiséis de junio de dos mil diecisiete.

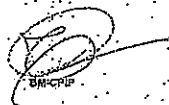
En apelación y con copia de la pieza de amparo de primer grado, se examina la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, constituida en Tribunal de Amparo, en cuyo numeral X otorgó la protección interina solicitada, en la acción constitucional de amparo promovida por Silvia Patricia Valdés Quezada contra la Junta de Disciplina Judicial.

ANTECEDENTES

A) Hechos y argumentos que motivaron la promoción del amparo: de lo expuesto por la postulante en su escrito inicial y del análisis de las actuaciones, se resume: a. ante la Supervisión General de Tribunales del Organismo Judicial, la Fundación Myrna Mack, por medio de su Representante Legal, Helen Beatriz Mack Chang, presentó denuncia en su contra de la postulante, en la calidad que ejerció como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, por estimar vulneración a sus derechos al difundir un mensaje expresado por Ricardo Méndez Ruiz, relativo a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; esto según la denunciante fue realizado por medio de la aplicación "whatsapp"; b. dicha denuncia fue remitida a la Junta de Disciplina Judicial para su conocimiento, sin embargo, las actuaciones fueron devueltas a la Supervisión General de Tribunales para que procediera a la investigación de los hechos denunciados; c. dentro de las diligencias realizadas, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la postulante presentó

  
CPIP-JEDV

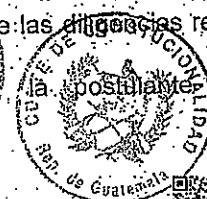
  
CPIP-OD

  
CPIP

  
GPPE-CPIP

  
CPIP-MGAI

  
REGRAL/CPIP







7  
B

documentación que estimo pertinente, con el propósito de demostrar la improcedencia de la denuncia referida; d. al finalizar la investigación, la Supervisión referida concluyó que no se encontraron elementos suficientes para establecer la conducta denunciada, por lo que recomendó no admitirla a trámite; e. al recibir las actuaciones, la Junta de Disciplina Judicial en resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, admitió para su trámite la denuncia relacionada; f. contra esa resolución, la postulante interpuso recurso de reposición, el que se declaró sin lugar en pronunciamiento de quince de febrero de dos mil diecisiete -- acto reclamado --, con fundamento en que debían agotarse las fases del proceso con el propósito de esclarecer el hecho denunciado. Estima vulnerados sus derechos de defensa y petición, así como el principio jurídico del debido proceso, porque, al emitir la decisión que por esta vía reclama, la autoridad cuestionada varió la forma del proceso debido a que declaró sin lugar la reposición que interpuso sin observar que no debió ser admitida; toda vez que según aduce, se basó en las formulaciones efectuadas por la denunciante, pese a que debió fundamentarse en lo considerado por la Supervisión General de Tribunales; agregó que la autoridad cuestionada no posee la facultad para efectuar la investigación de los hechos denunciados, razón por la que tampoco podía decidir sobre la procedencia de la denuncia relacionada; afirmó que la autoridad objetada no se pronunció respecto de los agravios que expresó y el acto que señaló como lesivo, no contiene la debida fundamentación que impone el artículo 11 B/s del Código Procesal Penal. Solicitó que se otorgue el amparo provisional y, como consecuencia, se deje en suspenso el acto reclamado. B) Informe circunstanciado: la Junta de Disciplina Judicial, por medio de su Presidente, Gabriel Estuardo García Luna, informó lo siguiente: 1) mediante resolución de

  
CPIP-JFDV

  
CPIP-DO

  
IN-CPIP

  
GFPE-CPIP

  
CPIP-MGAN

  
SECCRAL-CPIP





148

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**  
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Expedientes acumulados  
935-2017 y 1005-2017  
Página 3 de 6

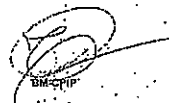
siete de febrero de dos mil diecisiete, admitió la denuncia presentada contra la postulante con base en la investigación y análisis de las actuaciones realizada por los supervisores auxiliares de Tribunales y señaló audiencia para el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; ii) la solicitante interpuso recurso de reposición contra la admisión de la denuncia, la cual fue declarada sin lugar; y iii) la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Junta de mérito la reprogramación de la audiencia referida, con fundamento en que, en esa fecha, la denunciada debía asistir a la jornada de la Organización Internacional del Trabajo en Guatemala, por lo que se reprogramó para el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. C) **Decisión asumida por el a quo respecto del amparo provisional:** dispuso otorgarlo en el sentido de dejar en suspenso la resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete, señalada como lesivo. D) **Apelaciones:** la Fundación Myrna Mack y el Ministerio Público, por medio de la Agente Fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, abogada Sara Edith Zamora Ordoñez, terceros interesados, apelaron la decisión referida en la literal anterior. La Fundación citada argumentó que el auto que por esta vía reclama, no establece el efecto que se pretende dar a la protección provisional decretada en primera instancia, ni contiene la fundamentación que debe tener una resolución judicial. El Ministerio Público indicó que el acto reclamado no lesionó agravio en la esfera jurídica de los derechos de la amparista, puesto que fue emitido en el ejercicio de las facultades de la Junta denunciada quien efectuó el análisis de los hechos sometidos a su conocimiento.

**CONSIDERANDO**

Conforme a lo preceptuado en el Artículo 27 de la Ley de Amparo,

  
CPJP-JFDV

  
CPJP-DO

  
CPJP

  
GPPE-CPJP

  
CPJP-MGAM

  
CPJP





Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la suspensión del acto reclamado procede cuando a juicio del tribunal las circunstancias lo hagan aconsejable. Igualmente, el Artículo 28 del mismo cuerpo legal establece que esta debe otorgarse cuando se produzca alguno de los supuestos que se prevén en ese precepto.

---II---

Apreciados los hechos relatados por la postulante, con base en el análisis efectuado a la copia de la pieza de amparo de primer grado, la resolución que se conoce en alzada y el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República, a juicio de esta Corte, en el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina requerida; ni se dan los supuestos regulados en el artículo 28 ibidem, por lo que debe revocarse el numeral X de la resolución apelada y denegar el amparo provisional solicitado.

#### LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268, 272 inciso c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 30, 149, 163 inciso c), 170 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89; 33 y 34 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad.

#### POR TANTO:

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: I. Por inhibitorias de los Magistrados José Francisco De Mata Vela, Dina Josefina Ochoa Escribá, Neftaly Aldana Herrera, José Mynor Par Usen, María Cristina Fernández García, María de los Angeles Araujo Bohr y

  
CPJP-JFDV

  
CPJP-DO

  
BM-CPJP

  
GEPF-CPJP

  
CPA-MGAM

  
MAGAL-CTP





CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Expedientes acumulados  
935-2017 y 1005-2017  
Página 5 de 6

9  
16

María Consuelo Porras Argueta, se integra el Tribunal con el Magistrado Henry Philip Comte Velásquez y por sorteo obligatorio con los Magistrados José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández García. Asimismo, por razón de las inhibitorias referidas, asume la Presidencia en forma interina el Magistrado Bonerge Amilcar Mejía Orellana, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad. II. Con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Fundación Myrna Mack, por medio de la Representante Legal, Helen Beatriz Mack Chang y el Ministerio Público, por medio de la Agente Fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, abogada Sara Edith Zamora Ordoñez—terceros interesados—

III. Revoca el numeral X de la resolución apelada y resolviendo conforme a Derecho, deniega el amparo provisional solicitado. IV. Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase la copia del antecedente.

  
CRIP-JFDV

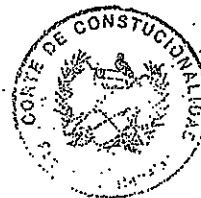
  
CRIP-DO

  
BIN-CPIR

  
GPPE-CPIP

  
CPI-MGAM

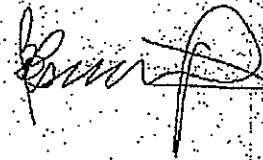
  
RECORDAL CPIP



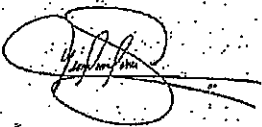




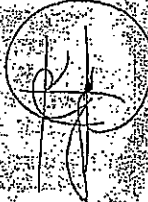
10  
17



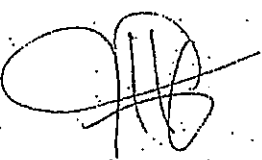
Firmado digitalmente  
por BONERGE  
AMILCAR MEJIA  
ORELLANA Fecha:  
26/06/2017 1:23:48 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por GLORIA  
PATRICIA PORRAS  
ESCOBAR Fecha:  
26/06/2017 1:26:18 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad



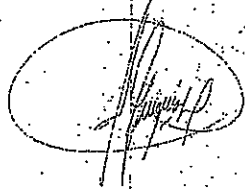
Firmado digitalmente  
por JOSE MYNOR  
PAR USEN Fecha:  
26/06/2017 1:30:17 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por HENRY PHILIP  
COMTE VELASQUEZ  
Fecha: 26/06/2017  
1:31:09 p. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por MARIA CRISTINA  
FERNANDEZ GARCIA  
Fecha: 26/06/2017  
1:31:48 p. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por MARTIN RAMON  
GUZMAN  
HERNANDEZ Fecha:  
26/06/2017 1:38:53 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad





11  
18

**EXPEDIENTE 2754-2017, 2767-2017 y 2802-2017**

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Guatemala, diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete que emitió la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo que promovió Silvia Patricia Valdés Quezada en su calidad de Magistrada Vocal Primero de la Corte Suprema de Justicia, contra la Junta de Disciplina Judicial. La postulante actuó con el patrocinio de la abogada Amarilis Ondina Navas Portillo. Es ponente en el presente caso la Magistrada Vocal III, Gloria Patricia Porras Escobar, quien expresa el parecer de este Tribunal.

**ANTECEDENTES**

**I. EL AMPARO**

**A) Interposición y autoridad:** presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal y, posteriormente remitido a la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala. **B) Acto reclamado:** resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete que emitió la Junta de Disciplina Judicial, que declaró sin lugar el recurso de reposición que interpuso la accionante contra la decisión de ese mismo órgano administrativo, que admitió a trámite la denuncia presentada en su contra por la Fundación Myrna Mack. **C) Violaciones que denuncia:** a los derechos de defensa y a una tutela judicial efectiva, así como a los principios de



W



12  
19

seguridad jurídica, no hay delito ni pena sin ley anterior, y al debido proceso. D)

**Hechos que motivan el amparo:** de lo expuesto por la accionante y del estudio de los antecedentes, se resume: **D.1) Producción del acto reclamado:** a) Helen Beatriz Mack Chang, como representante legal de la Fundación Myrna Mack, presentó denuncia en contra de la postulante ante la Junta de Disciplina Judicial, argumentando que a través de "Twitter" se enteró que la ahora postulante, en su calidad de Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, difundió mediante "Whatsapp" un comentario calumnioso y difamatorio contra su persona y de la fundación que representa; b) en virtud de lo anterior, la Supervisión General de Tribunales, luego de la investigación respectiva, recomendó no admitir a trámite la denuncia referida; c) no obstante lo anterior, la autoridad denunciada consideró que del análisis del informe de investigación y de las actuaciones, era procedente admitir a trámite la mencionada denuncia; y d) contra la decisión anterior interpuso reposición, medio de impugnación que fue declarado sin lugar por medio de la resolución que constituye el acto reclamado. **D.2) Agravios que denuncian:** indica la solicitante que la autoridad objetada trasgredió sus derechos porque: a) de conformidad con los artículos 11 literal b) y 50 de la Ley de la Carrera Judicial, la Supervisión General de Tribunales tiene la calidad de ente investigador, y por ende es quien debe corroborar si los hechos denunciados constituyen o no una falta, como resultado de la investigación objetiva, y determinar si debe admitirse o no la denuncia; b) del análisis del informe rendido por la Supervisión General de Tribunales, en el que recomendó que no se admitiera la denuncia de marras, puede advertirse que los hechos imputados no encuadran en ninguna de las faltas expresamente reguladas por la Ley citada, por lo que a la luz del artículo 17 de la Carta Magna, no puede iniciarse un proceso en su contra por la comisión de una



supuesta falta que no está regulada en ley; c) la imputación del hecho, la calificación provisional y la fundamentación que contiene la decisión que admitió a trámite la denuncia, no concuerda con el Informe presentado por la Supervisión General de Tribunales, por lo que se trasgredió lo regulado en los artículos 51, 54 y 67 de la Ley mencionada, debido a que la calificación jurídica y la imputación de hechos corresponde hacerla a dicha Supervisión; d) al dar trámite a la denuncia en la forma en que lo hizo, la autoridad denunciada varió las formas del proceso, en virtud que no tomó en consideración el Informe antes indicado, en el que se recomendó no admitir a trámite la denuncia referida; e) se trasgredió su derecho a una tutela judicial efectiva, porque el auto enjuiciado carece de fundamentación y no se encuentra ajustado a Derecho; f) los fallos constitucionales en los que la autoridad reclamada basó su decisión, son pronunciamientos emitidos con base en la Ley de la Carrera Judicial derogada, por lo que son inaplicables; y g) existe falta de fundamentación, porque no se pronunció sobre el examen de los medios de prueba que fueron aportados al proceso, y para admitir una denuncia deben existir indicios suficientes.

**D.3) Pretensión:** solicitó que se otorgue amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso definitivo el acto cuestionado, y se emita una nueva decisión en la que se declare con lugar el recurso de reposición incoado. **E) Uso de recursos:** ninguno. **F)**

**Casos de procedencia:** invocó los contenidos en las literales a), b), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. **G)**

**Leyes que se consideran violadas:** citó los artículos 2, 12, 17 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y 11, literal b), 50, 51 y 67 de la Ley de la Carrera Judicial.



## II. TRÁMITE DEL AMPARO

**A) Amparo provisional:** se otorgó. **B) Terceros interesados:** a) la Fundación





14  
21

Myrna Mack, y b) la Supervisión General de Tribunales. **C) Informe circunstanciado:** la autoridad denunciada al rendir el informe requerido, presentó un resumen cronológico de las etapas procesales del procedimiento administrativo de mérito. **D) Remisión de antecedentes:** copia certificada del expediente 19-2017 de la Junta de Disciplina Judicial, que contiene la denuncia planteada por la Fundación Myrna Mack contra la amparista. **E) Medios de comprobación:** los aportados al proceso de amparo de primera instancia. **F) Sentencia de primer grado:** la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, **consideró:** "...este Tribunal Constitucional de Amparo procede analizar (sic) y a valorar los medios de prueba aportados por las partes procesales de la siguiente manera. 1) el Recurso de Reposición de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete presentado por la amparista en contra de la resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete emitida por la autoridad recurrida [Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial] en la cual resuelve admitir para su trámite la denuncia presentada por la señora Helen Beatriz Mack Chang en su calidad de representante legal de la Fundación Mirna Mack en contra de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Silvia Patricia Valdés Quezada. Con dicho medio de prueba se acreditan cuáles fueron los agravios planteados por la amparista ante la autoridad recurrida siendo los siguientes 'que la Junta de Disciplina Judicial realice un análisis de la denuncia y de la investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales'. Otorgándole valor probatorio. 2) Resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete dictada por la Junta de Disciplina Judicial en donde resuelve sin lugar el Recurso de Reposición presentado por la amparista indicando que no le asiste la razón jurídica a



la impugnante, porque lo que se pretende es que esta Junta de Disciplina Judicial valore algunos medios de investigación y por ende que se rechace la denuncia, lo cual no sería congruente al existir un hecho denunciado el cual confrontado con la ley posee una calificación jurídica que solamente después de haberse diligenciado los medios de prueba en audiencia es que la Junta de Disciplina Judicial puede darles o no valor probatorio a efecto de establecer con base a la misma si efectivamente existió hecho denunciado (sic) tal como fue planteado o si por el contrario no pudo ser probado, siendo necesario llevar a cabo la audiencia señalada para agotar las fases procesales. A este medio de prueba también se le concede valor probatorio pues a través del mismo se establece que la autoridad recurrida no resolvió los agravios planteados por la amparista. El artículo 50 de la Ley de la Carrera Judicial en el quinto párrafo establece: La Supervisión de Tribunales (sic) tendrá la calidad de ente investigador en el respectivo procedimiento disciplinario. Si tuvo conocimiento directo de un hecho que pudiese calificarse como falta, iniciará inmediatamente la investigación correspondiente la que no podrá exceder de diez días debiendo notificar a la Junta de Disciplina Judicial del inicio de la investigación. En el informe incluirá el relato del hecho imputado y las pruebas obtenidas el artículo 51 del mismo cuerpo legal citado, en su tercer párrafo establece... Al recibir el informe de la Supervisión General de Tribunales la Junta emitirá inmediatamente resolución que contendrá: a)... b) señalamiento y precisión del hecho imputado por la Supervisión General de Tribunales, su calificación provisional y fundamentación. En el presente caso se ha establecido que la Supervisión General de Tribunales en su informe de investigación determinó que no encontró elementos suficientes para establecer que la conducta de la amparista haya conculcado disposiciones constitucionales ni las disposiciones contempladas en la literal f) de la Ley de la



Handwritten signature or mark.



16  
23

Carrera Judicial (sic) en relación con las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial contenidas en el Acuerdo 22-2013 (sic) y en consecuencia que su conducta se enmarque dentro de lo regulado en los Artículos 40, 41 y 42 de la Ley del Organismo Judicial como falta administrativa recomendando no admitir para su trámite la denuncia. Al tenor de los artículos citados este Tribunal ha establecido que la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial violentó a través de la resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete los Artículos 3 y 11 Bis del Código Procesal Penal y en consecuencia el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala pues en dicha resolución la autoridad recurrida no da respuesta a los agravios presentados por la amparista y fundamenta su resolución en sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad dictadas en base a la Ley de la Carrera Judicial ya derogada. 3) resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete dictada por la Junta de Disciplina Judicial en donde admite para su trámite la denuncia presentada en contra de la amparista por la señora Helen Beatriz Mack Chang en su calidad de representante legal de la Fundación Mirna Mack. En el numeral dos de dicha resolución la Junta de Disciplina Judicial al resolver indica que del análisis del Informe de Investigación y de las actuaciones, se admite para su trámite la denuncia a este medio de prueba (sic) se le concede valor probatorio ya que a través de la misma se determina que la Junta de Disciplina Judicial no se pronunció respecto a lo que recomendó la Supervisión General de Tribunales en el informe de investigación, tampoco realizó un razonamiento del porque a pesar de que dicho órgano recomendó no darle trámite a la denuncia planteada en contra de la amparista tomó la decisión de admitirla para su trámite lo que constituye falta de fundamentación en su resolución de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 Bis del Código



17  
24

Procesal Penal y una evidente violación al debido proceso. Así mismo en dicha resolución la Junta de Disciplina Judicial tomo como base para indicar los hechos señalados a la amparista los indicados por la parte denunciante no observando lo que al respecto indica el Artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial en el sentido de que el hecho imputado lo debe señalar la Supervisión General de Tribunales no el denunciante constituyendo ambas acciones una violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de conformidad con los Artículos 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al Artículo 3 del Código Procesal Penal. 4) Informe de investigación rendido por la Supervisión General de Tribunales dentro del expediente (...) donde indica el resultado de la investigación en donde recomienda no darle trámite a la denuncia presentada en contra de la amparista al cual se le otorga valor probatorio. 5) Expediente administrativo disciplinario (...) se le concede valor probatorio toda vez que en el mismo obran las resoluciones arriba mencionadas así como el Informe de investigación los cuales ya fueron debidamente valorados. 6) En base a los medios de prueba ya valorados este Tribunal constitucional de amparo concluye que le asiste la razón a la amparista en virtud que efectivamente se le vulnerado (sic) derechos fundamentales como lo es el debido proceso, el derecho de defensa, y la tutela judicial efectiva establecidos en el Artículo (sic) 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que la resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete no resuelve los agravios presentados por la amparista dentro de su Recurso de Reposición así mismo la Junta de Disciplina Judicial fundamentó su resolución en sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad dictadas en base a la Ley de la Carrera Judicial ya derogada mismas que no puede ser usadas (sic) para fundar su fallo ya que sobre la nueva Ley de la Carrera Judicial no existe



*[Handwritten signature]*





18  
25

precedentes. Así mismo (sic) este Tribunal constitucional de amparo ha establecido que la resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete dictada por la autoridad recurrida también adolece de vicios de procedimientos, toda vez que carece de fundamentación, ya que la Junta de Disciplina Judicial sobre la admisibilidad de la denuncia planteada en contra de la amparista sólo manifiesta que lo hace en base al análisis del informe de investigación y de las actuaciones sin especificar por qué a pesar de que el Supervisión General de Tribunales recomendó no darle trámite, dicho junta (sic) decide admitirla, la cual incurre en una falta de fundamentación y repercute en el derecho de defensa al que por mandato constitucional le asiste a cualquier persona sometida a procedimiento. Así mismo (sic) en base a lo que establece el Artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que establece que el tribunal de amparo al dictar la sentencia examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente, examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes, este tribunal constitucional de amparo también ha establecido que dentro del procedimiento disciplinario establecido en la Ley de la Carrera Judicial para funcionarios judiciales [jueces y magistrados] existe una laguna legal ya que el Artículo 51 de dicha ley, no contempla el procedimiento disciplinario a seguir cuando la Supervisión General de Tribunales a través de su investigación establezca que no se recomienda admitir para su trámite la denuncia ya sea porque no existen medios de prueba o porque no se ha cometido una falta administrativa, esta circunstancia no está prevista en la ley y esto viola el principio de legalidad y como consecuencia el debido proceso. El Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica en su último párrafo que 'ninguna persona puede ser juzgada por



Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente'. El Artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 32-2016 del Congreso de la República establece que en la tramitación del procedimiento por infracciones administrativas, deben de respetarse varios principios y se mencionan los que son de mayor aplicabilidad al caso se resuelve (sic) de legalidad, favorabilidad, derecho de defensa, debido proceso, objetividad, en ese sentido también esta ley en el Artículo 67 establece que se deben aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal y al respecto el Artículo 14 del Código Procesal Penal establece en el segundo párrafo que la analogía y la interpretación extensiva quedan prohibidas mientras no le favorezcan al acusado y en el último párrafo se establece que la duda favorece al imputado, al existir una laguna legal sobre el procedimiento a seguir por parte de la Junta de Disciplina Judicial cuando la Supervisión General de Tribunales determine que no debe admitirse para su trámite la denuncia presentada, este Tribunal estima que debe de aplicarse el principio favor rei o de favorabilidad como le llama la Ley de la Carrera judicial al momento de resolver y no crear o aplicar procedimientos que no están establecidos en la ley como ha sucedido en este caso en donde la Junta de Disciplina realizó la imputación de los hechos con base a lo que indicó la denunciante y no como lo establece la ley violentándose así el principio de legalidad y el debido proceso. Por lo que en ese sentido lo procedente es declarar con lugar la presente acción de amparo revocando la resolución de fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete, ordenando a la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial que resuelva el Recurso de Reposición planteado por la Amparista, con base en lo ya considerado y lo establecido en la ley...". Y resolvió: "...I. Otorga el amparo planteado por Silvia Patricia Valdés Quezada en calidad de Magistrada



Handwritten signature or mark.



20  
27

Vocal Primera de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (sic); II. En consecuencia se revoca la resolución de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete; III. Para los efectos positivos del presente fallo, la autoridad impugnada deberá dictar nueva resolución en donde resuelva el recurso de Reposición planteado por la Amparista de conformidad con lo anteriormente considerado; dentro de un plazo que no exceda de cinco días, contados a partir de que la presente resolución cause firmeza, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento incurrirá (sic) en una multa de dos mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes; IV. No se hace especial condena en costas procesales...".

### III. APELACIÓN

A) El Ministerio Público apeló y argumentó que la autoridad denunciada al emitir la decisión enjuiciada, actuó en ejercicio de las facultades que se le han conferido y sin ocasionar los agravios expuestos por la peticionaria, en virtud que analizó los aspectos impugnados, los que le permitieron arribar a la conclusión que la reposición planteada era improcedente y, como consecuencia, debía admitirse para su trámite la denuncia planteada contra la ahora accionante. Solicitó que se declare con lugar el recurso planteado y, como consecuencia, se revoque el fallo de primer grado. B) La Fundación Myrna Mack, tercera interesada, apeló y manifestó que el *a quo* al emitir su decisión, efectuó un análisis subjetivo del caso concreto, desnaturalizando la acción de amparo, constituyéndola en una instancia revisora de lo actuado por los órganos comunes, lo que es totalmente improcedente. Afirmó que la autoridad denunciada al proferir el acto reclamado no ocasionó las violaciones aducidas por la interesada, en virtud que actuó apegada a Derecho, de ahí que el hecho que lo resuelto sea contrario a los intereses de la ahora peticionaria, no significa que se



21  
20

hayan vulnerado derechos que ameriten protección constitucional. Solicitó que se declare con lugar el recurso incoado y, como consecuencia, se revoque la sentencia de primer grado.

#### IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

A) La **accionante** manifestó que los recursos de apelación no cumplen con el presupuesto establecido en el artículo 18 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, en virtud que no contienen la motivación debida, puesto que los argumentos expuestos constituyen aseveraciones generales que no tienen relación con el caso concreto. Argumentó que los fallos citados en el acto reclamado son inaplicables al asunto de mérito, en virtud que no hacen referencia a la nueva Ley de la Carrera Judicial, sino de la anterior. Señaló que la decisión enjuiciada le causa agravio, porque al haberse admitido para su trámite la denuncia de marras, es posible que sea suspendida en el ejercicio de su cargo, agregado al hecho que, por haberse admitido la misma, en la forma en que se hizo, se violan los principios del proceso acusatorio. Solicitó que se declaren sin lugar las apelaciones promovidas y, como consecuencia, se confirme la decisión de primer grado. B) La **Fundación Myrna Mack, tercera interesada**, reiteró los argumentos que expuso en su escrito de apelación, y agregó que conforme los artículos 8, 325 y 326 del Código Procesal Penal y el principio de imperatividad, aplicables supletoriamente, el ente investigador tiene la facultad de solicitar el sobreseimiento o la clausura provisional, sin embargo, el Juez tiene la autoridad para rechazar esa solicitud y ordenar que se presente la acusación correspondiente, de ahí que la autoridad denunciada al admitir a trámite la denuncia a pesar de haberse recomendado no hacerlo, actuó en ejercicio de sus facultades. Manifestó que el acto reclamado contiene la fundamentación debida, en virtud que contiene los elementos que permitieron a la autoridad reprochada denegar el



1





12  
JA

recurso planteado. Solicitó que se declare con lugar la apelación interpuesta y, como consecuencia, se revoque la decisión de primer grado. **C) La Supervisión General de Tribunales, tercera interesada**, indicó que si bien, de conformidad con lo regulado en el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, corresponde a la Junta de Disciplina Judicial admitir o no a trámite una denuncia, ésta decisión debe tomarse con sustento en los resultados obtenidos por la investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales, porque a esta última es a quien legalmente le corresponde efectuar la imputación del hecho. Expuso que de la lectura de la sentencia de amparo impugnada no se advierte la concurrencia de los agravios expuestos por los impugnantes, así como tampoco se logra advertir que se haya realizado un análisis subjetivo del caso concreto. Solicitó que se declaren sin lugar las apelaciones planteadas. **D) El Ministerio Público** indicó que no comparte el criterio sostenido por el *a quo*, en virtud que el amparo es improcedente cuando la decisión impugnada ha sido emitida en ejercicio de las facultades que la Ley le otorga a la autoridad cuestionada y sin que se advierta la comisión de agravios. Expuso que la Junta de Disciplina Judicial actuó conforme lo regulado en el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, porque será luego de que se lleve a cabo la audiencia respectiva (en la que las partes presenten los medios de prueba correspondientes), que la Junta mencionada podrá resolver el fondo de la controversia, y no al inicio del proceso, como lo pretende la interesada, circunstancia que guarda relación con lo que para el efecto resolvió esta Corte en el expediente 2845-2015 (aplicable aunque se trate de una Ley anterior). Solicitó que se declaren con lugar los recursos de apelación y, como consecuencia, se revoque la decisión que se conoce en grado.

#### CONSIDERANDO



13  
30

- I -

No causa afectación a los derechos constitucionalmente reconocidos, la decisión de la Junta de Disciplina Judicial que, al resolver un recurso de reposición, confirma la decisión de admitir a trámite una denuncia presentada contra un funcionario judicial, porque será en el proceso respectivo, que se determinará si el hecho imputado es constitutivo de falta o no.

- II -

Silvia Patricia Valdés Quezada solicita amparo contra la Junta de Disciplina Judicial, señalando como agravante la resolución de quince de febrero de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de reposición que interpuso contra la decisión de ese mismo órgano administrativo, que admitió a trámite la denuncia presentada en su contra por la Fundación Myrna Mack. Aduce la accionante que ese proceder supone conculcación a sus derechos, por los motivos que quedaron reseñados en el apartado de Antecedentes del presente fallo.

- III -

La *quid iuris* del asunto que se somete a conocimiento de la justicia constitucional, consiste en el hecho que la autoridad denunciada, al resolver, declaró sin lugar el recurso de reposición que la ahora peticionaria planteó contra la resolución por medio de la cual la Junta de Disciplina Judicial admitió a trámite la denuncia presentada por la Fundación Myrna Mack en su contra, a pesar que la Supervisión General de Tribunales recomendó no admitir a trámite dicha denuncia.

Al respecto es preciso traer a colación lo que para el efecto regula el artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, que literalmente preceptúa: "*Procedimiento. Recibida la denuncia la Junta de Disciplina Judicial, decidirá sobre su admisibilidad. Contra esta resolución, cualquiera de las partes podrá interponer, dentro del plazo*



*[Handwritten signature]*



de tres días siguientes a su notificación, recurso de reposición en forma escrita ante la misma Junta, el que se resolverá dentro del plazo de dos días después de su presentación. Contra la resolución que decide la reposición no cabrá otro recurso. Resuelta la reposición confirmando la continuidad del trámite o transcurrido el plazo sin que se haya recurrido, la Junta de Disciplina Judicial, ordenará a la Supervisión General de Tribunales, en caso de no haberla hecho de oficio, realizar la investigación pertinente (...), debiendo a su término presentar el informe con la respectiva imputación del hecho y pruebas recabadas. El plazo podrá ser ampliado (...), a solicitud de la Supervisión General de Tribunales, en consideración de la complejidad del asunto o de la prueba. Al recibir el informe de la Supervisión General de Tribunales, la Junta emitirá inmediatamente resolución, la cual contendrá: a) Individualización del quejoso y funcionario denunciado; b) Señalamiento y precisión del hecho imputado por la Supervisión General de Tribunales, su calificación provisional y fundamentación; c) Citación de las partes y del denunciado a la audiencia señalada, con la advertencia de continuar el trámite en rebeldía. (...) d) Información al denunciado de su derecho de ejercer su defensa material y técnica personalmente o nombrando abogado de su confianza, así como de comparecer a la audiencia con las pruebas pertinentes...".

Del estudio del caso concreto, se advierte que: a) el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la Fundación Myrna Mack presentó denuncia contra la ahora accionante, exponiendo los motivos por los que estima que la funcionaria pública cometió una falta en el ejercicio de su cargo (folios 1 al 4 del antecedente del amparo); b) la Junta de Disciplina Judicial, previo admitir a trámite la denuncia, ordenó a la Supervisión General de Tribunales que investigara el hecho denunciado (folio 32 del antecedente del amparo); c) el dos de febrero del mismo año, la



25

32

Supervisión mencionada rindió Informe de investigación, en el que recomendó no admitir a trámite la denuncia (folios 34 al 45 de la pieza que constituye el antecedente de la presente acción); d) recibido el informe mencionado, el siete del mes y año relacionados, la Junta de Disciplina Judicial emitió resolución, en la que en el apartado conducente indicó: "...II. Del análisis del informe de investigación y de las actuaciones, se admite para su trámite la denuncia presentada por Helen Beatriz Mack Chang, en su calidad de Representante Legal de la Fundación Myrna Mack, en contra de la abogada Silvia Patricia Valdés Quezada, en su calidad de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, por lo que en consecuencia se le señala el siguiente hecho de acuerdo a la denuncia presentada: '(...) Con su actuar incurrió en la falta grave establecida en el artículo 41 literal f), de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, consistente en falta de acatamiento de las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial, contenidas en el Acuerdo 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia'. Para que todas las partes comparezcan ante la Junta de Disciplina Judicial, a discutir el hecho denunciado, se señala audiencia..."; y e) la ahora accionante planteó reposición, recurso que fue resuelto mediante la decisión que constituye el acto reclamado, en la que la Junta de Disciplina Judicial consideró que, con base en el análisis de la resolución recurrida, las actuaciones y los argumentos expuestos por la impugnante, la pretensión de la interesada es que se valoren "algunos de los medios de investigación" y, por ende, que se rechace la denuncia, circunstancia que es improcedente por existir un hecho que encuadra en una calificación jurídica, por lo que solamente después de haberse diligenciado los medios de prueba, la Junta puede otorgarles valor probatorio o no, respaldando su criterio en fallos emitidos por esta Corte (folios 299 al 301 del antecedente del



*[Handwritten signature]*





24  
33

presente amparo).

Esbozadas las circunstancias en que fue emitido el acto enjuiciado, la transcripción del apartado conducente del artículo 51 *ibid*, y del análisis de los agravios expresados por la amparista en la presente acción constitucional, este Tribunal no advierte la concurrencia de las trasgresiones aducidas, en virtud que la Junta de Disciplina Judicial, al emitir el acto reclamado, actuó en ejercicio de sus facultades, porque conforme la norma citada, es a ella a quien compete decidir sobre la admisibilidad de las denuncias presentadas contra los Jueces y Magistrados, sin que sea óbice para ello, el hecho que la Supervisión General de Tribunales "recomiende" no admitir a trámite la denuncia. Asimismo, en los casos como el que ahora se conoce, es evidente que el simple hecho de admitir a trámite la denuncia presentada contra un funcionario judicial, no es susceptible de ocasionar agravio, porque será durante la secuela procesal respectiva que, conforme los medios de prueba que las partes aporten al proceso, se decidirá si el hecho imputado constituye o no una falta. Además, quien se considere afectado por la decisión que en su momento emita la Junta referida, puede plantear apelación de conformidad con lo regulado en el artículo 63 de la Ley de la Carrera Judicial, con el propósito que la Junta de Disciplina Judicial de Apelación conozca en alzada y examine el pronunciamiento correspondiente, circunstancias que son congruentes con el principio jurídico del debido proceso y derecho de defensa respectivos. Por lo anteriormente expuesto, esta Corte no advierte la concurrencia de los agravios denunciados por la accionante, en virtud que la autoridad razonó adecuadamente su decisión y actuó en ejercicio de las facultades que se le han conferido, sin trasgredir los derechos constitucionales que le asisten a Silvia Patricia Valdés Quezada.

Respecto al argumento expuesto por la amparista, consistente en que la



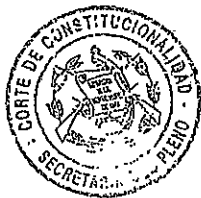
27  
34

autoridad reprochada basó su decisión en sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y este Tribunal, en las que se resolvieron controversias basadas en la Ley de la Carrera Judicial anterior, se estima que dicho reclamo no configura trasgresión a los derechos de la accionante, en virtud que esos pronunciamientos fueron citados con el único propósito de hacer énfasis en que, admitir a trámite una denuncia presentada contra un funcionario judicial, no configura violación alguna, por lo que respecto a ese tópico, no se advierte la violación señalada por la interesada.

Por lo considerado se estima que el amparo planteado es notoriamente improcedente, por lo que debe denegarse y habiéndose resuelto en distinto sentido por el *a quo*, debe revocarse el fallo que se conoce en alzada, emitiendo la sentencia que en Derecho corresponde, en la que se condene en costas procesales a la accionante, por existir sujeto legitimado para su cobro, y se imponga la multa respectiva a los abogados patrocinantes, de conformidad con lo regulado en los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

#### LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268, 272 inciso c), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 8, 10, 42, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 149, 163 Inciso c), 170, 185, 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 1 y 7 Bis del Acuerdo 3-89 y 18, 19, 36 del Acuerdo 1-2013 ambos de la Corte de Constitucionalidad.

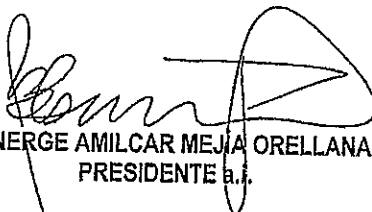


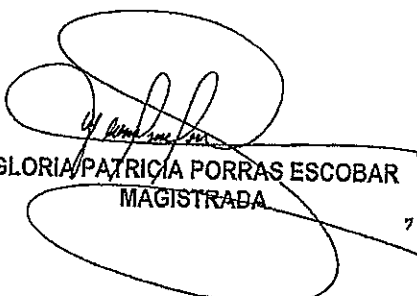
#### POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: I) De conformidad con el auto de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Tribunal queda integrado con los Magistrados Bonerge Amilcar Mejía



Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Henry Philip Comte Velásquez, María Cristina Fernández García y María de los Angeles Araujo Bohr, respectivamente, para conocer y resolver el presente asunto, asimismo, asume la Presidencia de forma interina el Magistrado Bonerge Amilcar Mejía Orellana, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad. II) **Con lugar** los recursos de apelación interpuestos por Fundación Myrna Mack, tercera interesada, y el Ministerio Público; como consecuencia, **revoca** la sentencia que se conoce en alzada, y resolviendo conforme a Derecho: **a. Deniega** el amparo solicitado por Silvia Patricia Valdés Quezada contra la Junta de Disciplina Judicial; **b. Condena** en costas a la postulante, y **c. Impone** multa de un mil quetzales (Q. 1,000.00), a cada uno de los abogados patrocinantes, Amarilis Ondina Navas Portillo y Carlos Enrique Ortega Salguero, quienes deberán hacerla efectiva en la Tesorería de esta Corte, dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de que cause firmeza el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. III) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.

  
BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA  
PRESIDENTE a.i.

  
GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR  
MAGISTRADA

  
HENRY PHILIP COMTE VELÁSQUEZ  
MAGISTRADO

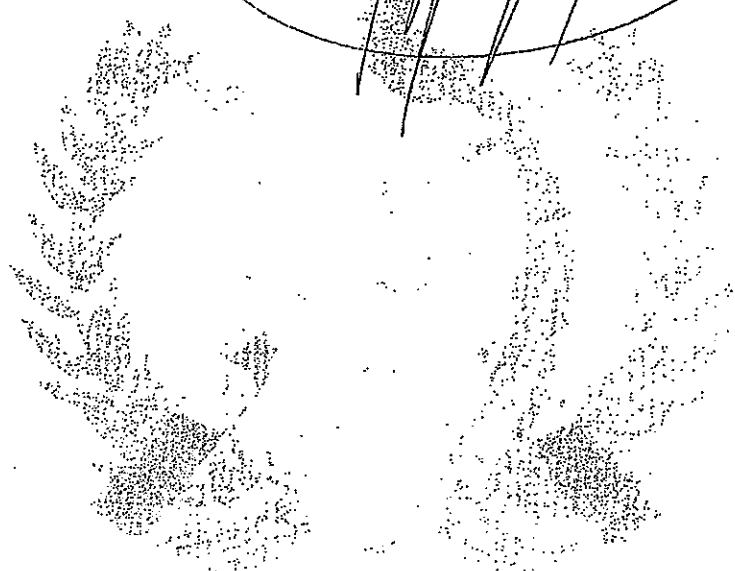


29  
36

MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA  
MAGISTRADA

MARIA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR  
MAGISTRADA  
Voto razonado disidente

MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ  
SECRETARIO GENERAL







30  
37

SE DETUVO APERTURA A JUICIO

## Sala de femicidio amparó a Alejos en Caso Negociantes de la Salud

Por Diario La Hora - 19 septiembre, 2016



Por José del Águila  
[jaguila@lahora.com.gt](mailto:jaguila@lahora.com.gt)

Un amparo provisional a favor de Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia, detuvo la audiencia de apertura a juicio en el caso conocido como "Negociantes de la salud". El amparo fue concedido por la Sala de Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Delitos Contra la Mujer.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), confirmó el amparo concedido a favor del sindicato y explicó que éste se dio en relación a la ampliación del auto de procesamiento.

No obstante, según explicó Sandoval, al tratarse de un amparo, los tribunales no hacen mayor razonamiento en su resolución.

El pasado 23 de marzo, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imputaron nuevos hechos a Alejos Cámbra ante el Juzgado Sexto de Instancia Penal, con lo que se buscaba probar su participación en una estructura vinculada a actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El pasado 13 de septiembre, el Ministerio Público (MP), a través de la FECI, solicitó, en base de los medios de prueba recabados, que los 14 supuestos integrantes de la estructura "Negociantes de la Salud", entre los cuales se



encuentra Alejos, enfrentarán juicio oral y público, por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

30

Las pruebas presentadas fueron 46 escuchas telefónicas, informes y documentos contables. Con esto, el MP y la CICIG buscan dejar constancia de que Alejos utilizó sus influencias para que el IGSS beneficiara con contratos millonarios en la compra de medicamentos a varias de sus empresas.

#### ANTECEDENTES

El pasado 27 de octubre, el MP y la CICIG anunciaron en conferencia de prensa la desarticulación de una supuesta red de corrupción que operaba en el IGSS y que estaría conformada por empleados de esa institución, funcionarios y personas particulares.

De acuerdo a las pesquisas, el modo de operar era que algunos proveedores de servicios médicos y medicamentos, acudían a operadores para que estos procuraran la venta de sus productos al IGSS. Según detallaron las autoridades, entre las empresas beneficiadas se encuentran varias ligadas a Gustavo Alejos.

Este no es el único caso en el que Alejos se encuentra involucrado, ya que el pasado 27 de julio fue ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito en el caso denominado "Cooptación del Estado".

Diario La Hora





ACTUALIDAD 360, GUATEMALA

## Sala de Femicidio ampara provisionalmente a Magistrada Stalling

12/04/2017 · 1 MINUTO LEER

Get Notifications



Fuente: Prensa Libre

El Juez Adrián Rodríguez, suspendió la audiencia en el Juzgado Séptimo, debido a que la Sala de Femicidio amparó provisionalmente a la magistrada Blanca Stalling, esto referente al abandono de la defensa.



***El Ministerio Público propuso como anticipo de prueba la declaración del juez Carlos Ruano, quien no pudo declarar por dicha suspensión.***



La audiencia se llevará a cabo hasta que el amparo sea rechazado o confirmado por la sala de Femicidio. 40

Stalling enfrenta proceso por tráfico de influencias, ya que aprovechándose de su puesto presionó al juez Carlos Ruano, para beneficiar a su hijo Otto Molina Stalling, quien está involucrado en el caso "Negociantes de la salud", por asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

Get Notifications

f LIKE

TWEET



ELECONOMISTA

FMI motiva a invertir en innovación y educación para incrementar la productividad

12/04/2017

VER PUBLICACIÓN

ACTUALIDAD 360 GUATEMALA

El MP presentó apelación contra medidas sustitutivas en caso Hogar Seguro

12/04/2017

VER PUBLICACIÓN

## ¡Suscríbete a nuestro newsletter!

Información importante para ti

Enter Email

☐ Al marcar esta casilla, confirma que ha leído y está de acuerdo con nuestros términos de uso con respecto al almacenamiento de los datos enviados a través de este formulario.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE

10

1

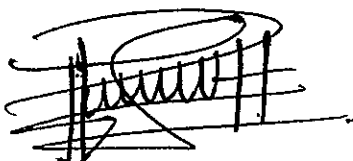
2



Datos de las personas o entidades que presentan el impedimento:

1. Nombre:	José Pablo Juárez Herrarte
Documento Personal de Identificación:	3017 39242 0101
Profesión:	Estudiante
Estado Civil:	Soltero
Domicilio:	Guatemala, Guatemala
Dirección para ser notificado:	13 calle 2-14 zona 1, ciudad de Guatemala
Teléfono:	2463-2323
Correo electrónico:	contacto@alianzareformas.org

Firma de la persona que presenta el impedimento:



10

10

10



10/2/21

10/2/21

10/2/21